

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

TEMA:

La valoración de la prueba digital y la motivación en el proceso civil ecuatoriano

---

Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título de Abogada

AUTOR:

Jenifer Katerine Pilco Vinueza

TUTORA:

Abg. Mg. Jeanette Jordán Buenaño

Ambato – Ecuador

A. PAGINAS PRELIMINARES

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DIGITAL Y LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO CIVIL ECUATORIANO

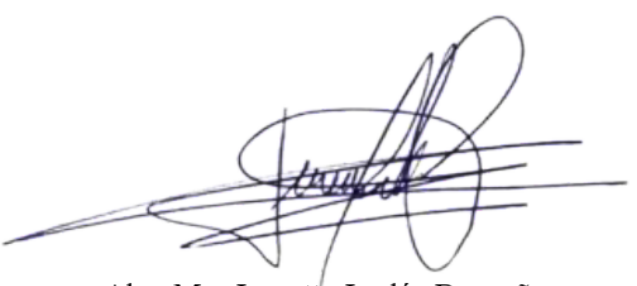
APROBACIÓN DEL TUTOR

Yo, Abg. Mg. Jeanette Jordán Buenaño, en mi calidad de Tutora del Proyecto de Investigación sobre el tema: **LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DIGITAL Y LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO CIVIL ECUATORIANO**, desarrollado por Jenifer Katerine Pilco Vinueza de la Carrera de Derecho, modalidad presencial, considero que dicho informe investigativo reúne los requisitos, tanto técnicos como científicos y corresponde a las normas establecidas en el Instructivo del Reglamento para la Titulación de Grado en la Universidad Técnica de Ambato.

Por lo tanto, autorizo la presentación de este ante el organismo pertinente, para que sea sometido a evaluación por los profesores calificadores designados por el H. Consejo Directivo de la Facultad.

Ambato, 29 de Mayo del 2026

Suscribo.



Abg. Mg. Jeanette Jordán Buenaño

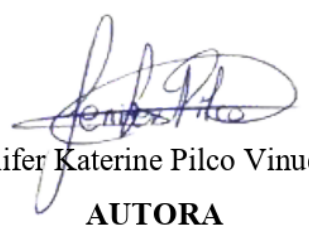
TUTORA

AUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, Jenifer Katerine Pilco Vinueza, manifiesto que los criterios emitidos dentro del trabajo de investigación **LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DIGITAL Y LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO CIVIL ECUATORIANO.** Como también los contenidos, ideas, análisis, conclusiones y propuestas son de mi entera responsabilidad.

Ambato, 29 de Mayo del 2026

Suscribo.



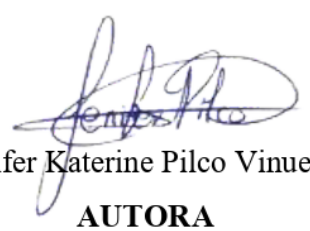
Jenifer Katerine Pilco Vinueza

AUTORA

DERECHOS DE AUTOR

Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de esta tesis o parte de ella un documento disponible para su lectura, consulta y procesos de investigación, según las normas de la Institución. Cedo los Derechos en línea patrimoniales de mi tesis, con fines de difusión pública, además, apruebo la reproducción de esta tesis, dentro de las regulaciones de la Universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga una ganancia económica: y se realice respetando mis derechos de autor.

Ambato, 29 de Mayo del 2026



Jenifer Katerine Pilco Vinueza

AUTORA

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO

Los Miembros del Tribunal de Grado APRUEBAN el siguiente Trabajo de Investigación titulado: **LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DIGITAL Y LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO CIVIL ECUATORIANO**, presentado por la señorita Jenifer Katerine Pilco Vinueza, de conformidad con el Reglamento de Graduación para obtener el Título Terminal de Tercer Nivel de la Universidad Técnica de Ambato**.**

Se autoriza su presentación ante los organismos correspondientes.

Ambato, ……2026

Para constancia firman:

LA COMISIÓN

……

Presidente

…… ……

Miembro **Miembro**

DEDICATORIA

A mis padres, Guillermo Pilco y Lucia Vinueza, por ser esos pilares fundamentales y nunca dejarme sola cuando más lo he necesitado. Con su amor, comprensión y paciencia infinita me han sabido guiar en este duro camino, brindándome siempre palabras de aliento y recordándome que, al regresar a casa, me esperaban con los brazos abiertos. Gracias por creer en mí, por celebrar cada uno de mis logros como si fueran propios y por recordarme día tras día, que siempre contare con su apoyo incondicional.

A mis hermanos, Cristhian y Patricio, por acompañarme en este largo camino y por brindarme siempre palabras de aliento cuando sentía que ya no podía más. Gracias por impulsarme siempre ha seguir adelante y acompañarme en cada paso de este camino.

A mis pequeños Elian, Valentina y Victoria, quienes con su ternura, alegría y cada uno de sus abrazos hacen que todo se sienta mejor y que cada esfuerzo valga la pena.

A mi gran ángel en el cielo, mi tío Freddy; quien solía llamarme “mi abogada”, sé que está muy orgulloso de mi y siempre lo recordare con su sonrisa característica y aquel carisma en el que decía que me iba a convertir en una gran abogada. Y lo estoy logrando, como él me decía: “un paso a la vez”.

A toda mi familia Pilco y Vinueza, por estar siempre pendientes de mí y recordarme que cada sacrificio trae consigo la recompensa de mañana.

Y este logro me lo dedico a mí, porque, a pesar de muchas veces quererme rendir en el camino, no lo hice, y hoy miro atrás y puedo decir con orgullo lo logré.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios, por permitirme culminar esta etapa de mi vida, por haberme guiado con sabiduría y conocimiento en los momentos más difíciles cuando sentía que ya no podía más.

A mis padres, por su apoyo incondicional en mi formación académica y por nunca dejarme sola, a pesar de cualquier circunstancia, gracias por creer en mí, incluso cuando yo misma dudaba de mis capacidades.

A mis docentes y mis doctoras de la institución donde realice prácticas, quienes, a través de sus enseñanzas, conocimientos y experiencias, me ayudaron a mi formación profesional y personal.

A mis amigos, por convertirse en una pieza fundamental de esta etapa universitaria, a pesar de los momentos de estrés y cansancio, de las largas jornadas de clases, donde a veces sentíamos que no podíamos más, siempre existía una sonrisa y la certeza de que lograríamos ser unas excelentes profesionales.

A Anita, Nico y Alex, gracias por ser esas personas que iluminaron mi camino con su amistad, por convertirse en ese apoyo incondicional a lo largo de esta etapa. Cada experiencia, cada palabra de aliento y cada momento vivido hicieron esta etapa mucho más bonita.

Agradezco a todas las personas que fueron parte de mi formación académica, que me regalaron un pedacito de su vida en esta etapa universitaria, dejando con ella recuerdos, risas y llantos, aquellos recuerdos que siempre permanecerán en mi memoria y mi corazón.

INDICE GENERAL DE CONTENIDOS

A. PAGINAS PRELIMINARES ii

APROBACIÓN DEL TUTOR iii

AUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN iv

DERECHOS DE AUTOR v

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO vi

DEDICATORIA vii

AGRADECIMIENTO viii

INDICE GENERAL DE CONTENIDOS ix

INDICE DE TABLAS xi

RESUMEN EJECUTIVO xii

ABSTRACT xiii

B. CONTENIDOS 1

CAPITULO I--MARCO TEÓRICO 1

2.1 Antecedentes 1

BASES TEÓRICAS 4

2.2 La prueba digital en el proceso civil ecuatoriano 4

2.2.1 Conceptualización de la prueba digital 4

2.2.2 Características de la prueba digital 5

2.2.3 Admisión de la prueba digital 7

2.2.4 Valoración de la prueba digital 8

2.3 Motivación judicial en el proceso civil ecuatoriano 9

2.3.1 Conceptualización de la prueba judicial 9

2.3.2 Debido proceso 10

2.3.3 Tutela judicial efectiva 10

2.3.4 Criterios de la motivación judicial 11

2.3.5 La motivación judicial y la prueba digital 12

2.3.6 Experiencia internacional sobre la valoración de la prueba digital y comparación con Ecuador 13

2.4 Marco normativo 17

2.4.1 Normativa aplicable a la prueba digital 17
2.5 Relación entre variables de estudio. 30
2.5.1 Relación entre la valoración de la prueba digital y la motivación judicial 30
2.6 Objetivos 31
2.6.1 Objetivo General 31
2.6.2 Objetivos Específicos 31
3 CAPITULO II.- METODOLOGÍA 33
3.1 Materiales 33
3.1.1 Recursos Institucionales 33
3.1.2 Recursos Humanos 33
3.1.3 Recursos Materiales 33
3.1.4 Recursos Tecnológicos 33
3.1.5 Recursos Financieros 34
3.2 Método 34
3.3 Nivel o Tipo de Investigación 34
3.4 Método aplicado 35
3.5 Técnica 35
3.6 Instrumentos 35
3.7 Población y Muestra 36
4 CAPITULO III.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 37
4.1 Análisis Interpretativo 37
4.2 Discusión 45
5 CAPITULO IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 50
6 Bibliografía 52
7 ANEXOS 58
8 Guia de entrevista 60

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.....15
Tabla 2.....34
Tabla 3.....37
Tabla 4.....38
Tabla 5.....41
Tabla 6.....42
Tabla 7.....43
Tabla 8.....44

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de investigación analiza la valoración de la prueba digital y la motivación judicial dentro de los procesos civiles ecuatorianos. Teniendo como objetivo general: Analizar la valoración de la prueba digital en la motivación en el proceso civil ecuatoriano. La relevancia de este tema responde a la incorporación de pruebas digitales, esto considerando la ausencia de un protocolo normativo donde unifique la regulación de su admisión, verificación y valoración de este tipo de prueba, generando con ello vacíos que comprometen la seguridad jurídica de las partes procesales y la legitimidad de las decisiones judiciales. En el marco normativo se examina la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico General de Procesos y la Ley de Comercio Electrónico, Firma Electrónico y Mensajes de Datos, así como el cotejamiento de normativa internacional con España, Colombia, Argentina, Estados Unidos y la Unión Europea, tomando en cuenta que existe regulaciones específicas y protocolos técnicos sólidos. Analizando además la Sentencia No.1158-17-EP/21 de la Corte Constitucional, donde en ella se establece la motivación suficiente y la razonabilidad como estándares de esta. La investigación adopta un enfoque cualitativo donde se combina con un análisis documental, revisión normativa y doctrinaria, además de enfocarnos en la guía de entrevista la misma que se realizó a diez jueces civiles del Complejo Judicial de Ambato. Permitiendo con ello identificar los criterios jurídicos empleados en la práctica, las complejidades existentes de la prueba digital y las capacidades actuales del sistema judicial. Esta información fue sistematizada mediante la herramienta de ATLAS.ti, facilitando el análisis de las entrevistas, obteniendo información relevante y concisa, evidenciando en sus resultados que la prueba digital posee características particulares como es la intangibilidad, volatilidad y facilidad de reproducción, por lo que se requiere mecanismos técnicos especializados para el tratamiento de esta prueba. Finalmente, se determinó que, aunque en la normativa ecuatoriana reconoce la prueba digital, existen aún vacíos legales respecto a su admisión, conservación y valoración en los procesos civiles ecuatorianos.

Palabras clave: prueba digital, motivación judicial, sana critica, debido proceso, seguridad jurídica.

ABSTRACT

This research paper analyzes the assessment of digital evidence and judicial reasoning within Ecuadorian civil proceedings. The relevance of this topic arises from the incorporation of digital media, considering the absence of a unified regulatory protocol governing the admission, verification, and evaluation of this type of evidence, thereby creating legal gaps that compromise the legal certainty of the parties involved and the legitimacy of judicial decisions. Within the legal framework, this study examines the Constitution of the Republic of Ecuador, the General Organic Code of Processes, and the Electronic Commerce, Electronic Signatures, and Data Messages Law, as well as a comparative analysis of international regulations from Spain, Colombia, Argentina, the United States, and the European Union, taking into account the existence of specific regulations and solid technical protocols. Furthermore, Constitutional Court Judgment No. 1158-17-EP/21 is analyzed, as it establishes sufficient reasoning and reasonableness as standards for judicial motivation. The research adopts a qualitative approach combined with documentary analysis, legal and doctrinal review, and the application of interview guidelines conducted with ten civil judges from the Ambato Judicial Complex. This made it possible to identify the legal criteria applied in practice, the existing complexities surrounding digital evidence, and the current capacities of the judicial system. The information obtained was systematized through the ATLAS.ti tool, facilitating the analysis of the interviews and obtaining relevant and concise information. The findings revealed that digital evidence possesses particular characteristics such as intangibility, volatility, and ease of reproduction, which require specialized technical mechanisms for its proper handling. Finally, it was determined that although Ecuadorian legislation recognizes digital evidence, there are still legal gaps regarding its admission, preservation, and evaluation within Ecuadorian civil proceedings.

Keywords: digital evidence, judicial reasoning, sound criticism, due process, legal certainty.

B. CONTENIDOS

CAPITULO I--MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

Álvarez (2023), su trabajo de investigación titulado: Valoración de la prueba digital en el proceso civil, cuyo objetivo es el análisis de la prueba digital dentro del proceso civil colombiano, teniendo un ello un énfasis en la valoración jurídica y legitimidad dentro del sistema probatorio. La investigación adapto un enfoque cualitativo de carácter documental, sustentando su desarrollo hermeneútico basado en la interpretación de normativa. Los resultados evidenciaron que la prueba digital tiene una validez en el ámbito jurídico, además de un reconocimiento legal en el ámbito jurídico. Concluyendo que la prueba digital es legítima y válida, y que la naturaleza de esta no se modifica, sino únicamente su forma o soporte material.

Para Diotto (2025), desarrollo el trabajo de investigación titulado: La Prueba Electrónica en el Proceso Civil, con el objetivo de analizar la prueba electrónica dentro de un proceso judicial, en cuanto a su naturaleza jurídica, validez y criterios de valoración. La metodología fue bibliográfica con el fin de recolectar información de doctrinas, leyes y documentos. Como resultados obtuvo que la prueba electrónica es confiable desde lo legal sin llegar a constituir un medio de prueba. Este trabajo afirma que la prueba debe ser evaluada de acuerdo con los principios convencionales, pero con la incorporación de los avances de las tecnologías.

Según Reyes (2025), en su investigación titulada: La prueba digital en los procesos civiles y su prohibición, desarrollada bajo un enfoque cualitativo, basado en el análisis normativo y un método comparativo entre dos sistemas jurídicos de España y Argentina. El objeto de estudio es analizar la problemática de la prueba digita en cuanto a la admisibilidad, valoración y limitaciones del sistema jurídico identificando vacíos normativos y proponiendo mecanismos de regulación. Los resultados evidenciaron la existencia de vacíos legales y la ausencia de protocolos adecuados, como es la cadena de custodia de la prueba digital. Concluye el autor

que es imprescindible una regulación específica de la prueba digital, así como la adecuada incorporación de la prueba digital, la misma que garantizaría una igualdad procesal y eficiencia judicial en el contexto de digitalización.

Oleas (2023), en su trabajo de titulación: La valoración de la prueba digital en los procesos civiles en el Ecuador, cuyo objetivo fue determinar las carencias de los parámetros de la prueba digital con el propósito de garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso de los derechos constitucionales. Para ello se implementó un enfoque cualitativo, mediante un análisis documental jurídico, procedimientos judiciales y jurisprudencias. Los resultados indicaron que, para que un juez haga una correcta valoración de la prueba digital o electrónica, debe considerarse la autenticidad e integridad, verificando que no haya sido manipulada o alterada. Concluyendo así que la regulación jurídica es insuficiente, dado la propia naturaleza de la prueba digital.

Meza (2024), en su trabajo titulado: La prueba digital en el proceso civil oral de Córdoba, planteo como objetivo analizar la prueba digital en el proceso civil así también su incorporación de esta dentro del derecho. Para ello se aplica una metodología cualitativa, misma que se enfrasca en la recolección de información, análisis normativo y el estudio de jurisprudencias. Los resultados indican que la prueba digital debe garantizar la autenticidad, la integridad y licitud mediante herramientas que permitan su verificación, como la firma electrónica, con el fin de constatar que la prueba no haya sido adulterada en el transcurso del proceso. Concluyó que la prueba digital contribuye a una mayor celeridad en el proceso oral, aunque su eficacia exige una correcta utilización por parte de los litigantes como de los juzgadores.

Gallardo (2024), en su trabajo de investigación titulad: La motivación como garantía del debido proceso. Análisis del caso No.1158-17-EP/21; el objetivo se basa en analizar la motivación judicial como garantía del debido proceso a partir del estudio del caso constitucional, para lo cual se emplea un enfoque cualitativo con método jurídico- dogmático y el análisis del caso. Los resultados evidenciaron la falencia en la motivación judicial debido a que refleja que esta resultaba inexistente e insuficiente, como se lo determina en la ley. Es por ello por lo que se

concluye que la motivación constituye un requisito indispensable del debido proceso, cuya ausencia vulnera derechos fundamentales y acarrea la nulidad de las decisiones judiciales.

Rivera (2021) en su tesis titulada: La motivación de las sentencias constitucionales como garantía del derecho al debido proceso, establece la función de la motivación como garantía del proceso en las sentencias constitucionales. Se adopto un enfoque cualitativo con método dogmático y análisis jurisprudencial, cuyos resultados evidenciaron que la motivación carece de claridad, lógica y suficiente. Concluyó que la motivación es un derecho fundamental que garantiza la seguridad jurídica y la legitimidad de la función judicial, y la misma debe encontrarse detallada y expresa de una manera clara, precisa y concreta.

Los autores Alvarado, Mejía y Becerra (2025), en su investigación titulada: Motivación en garantías jurisdiccionales: estándares y aplicación en Ecuador, publicado en la revista BIOLEX, plantean como objetivo analizar los estándares de suficiencia motivacional aplicados en las garantías jurisdiccionales en Ecuador, para que así exista la evaluación de la efectividad en la protección de los derechos fundamentales. Adaptando un enfoque cualitativo, basándose en la revisión de doctrina y jurisprudencia, obteniendo como resultado la determinación de los estándares constitucionales de motivación judicial. Los autores concluyeron que la motivación constituye un instrumento para la protección de derechos y un control constitucional.

La autora Mogrovejo (2023), en su trabajo de investigación: La motivación aparente como vulneración al derecho al debido proceso en la jurisprudencia constitucional, analizó la motivación aparente y su incidencia en la vulneración del debido proceso mediante un enfoque cualitativo con un análisis jurisprudencial y método analítico- jurídico. Los resultados permitieron identificar decisiones judiciales que tienen una motivación formal pero no existe un sustento real detrás del mismo. La autora concluyo que la motivación muchas veces vulnera derechas y genera inseguridades jurídicas, las mismas que pueden llegar a afectar la seguridad jurídica y el debido proceso.

Para Izurieta (2023), en su investigación: La motivación en decisiones judiciales de la unidad civil de Santo Domingo, establece analizar el cumplimiento de la motivación de sentencias civiles en Santo Domingo, implementando un enfoque mixto, tanto cualitativo como cuantitativo con un análisis documental, jurisprudencial y doctrinario, así como el abarcamiento de entrevistas, para poder determinar una línea de resultados contables. Los resultados evidenciaron la deficiencia de la motivación en procesos civiles, especialmente en la fundamentación de decisiones. Concluyendo que la falta de motivación adecuada afecta la calidad de las decisiones judiciales y del debido proceso, llegando a tener un problema ante las diferentes decisiones de los juzgadores de justicia.

Bases teóricas

2.2 La prueba digital en el proceso civil ecuatoriano

2.2.1 Conceptualización de la prueba digital

Aunque la prueba conserva el propósito tradicional de generar una convicción judicial en torno a los hechos discutidos, el soporte tecnológico cambia el modo en que se desarrolla esa convicción. Según Ruiz (2006), la prueba es el conjunto de argumentos que se emplean para convencer al juez (p. 184). Por otro lado, López (2023) señala que la prueba digital incluye información telemática que puede ser extraída, transformada en datos y analizada desde un punto de vista técnico, normalmente a través de una intervención pericial (p. 203). La distinción entre ambas posturas permite afirmar que la prueba digital no cambia el propósito de la prueba, pero sí requiere nuevos avales para su obtención, conservación y explicación técnica.

Puetate et al. (2021) vinculan la acreditación de hechos en el proceso judicial con el documento digital, siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas por el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) (pág. 3). Esto respalda la opinión de López (2023), porque para que los datos sean válidos no es suficiente que se encuentren en un aparato, un correo electrónico, una plataforma digital o una aplicación; deben estar presentados de manera verificable, jurídica e íntegramente aceptable. En consecuencia, la prueba digital debe ser

examinada como un medio probatorio que combina dos elementos: de carácter técnico vinculado a la trazabilidad, autenticidad, conservación e integridad; y de naturaleza jurídica que se refiere a la utilidad, legalidad y pertinencia.

Por ello, la prueba digital no es una categoría extraña al sistema probatorio ecuatoriano, sino un modo de prueba que se ha adaptado a la sociedad digital. Su valor no es únicamente el contenido visible, como un archivo descargado o una captura de pantalla, sino el proceso que permite verificar que el contenido corresponde a la fuente citada sin alteraciones. Esta exactitud es un elemento fundamentado de una investigación, pues la motivación judicial no sólo debe contestar el porqué de la existencia de determinada evidencia electrónica presentada al proceso, sino adicionalmente por qué el juez considera la prueba presentada digna de credibilidad, auténtica y suficiente para la carga del fallo que adopte.

2.2.2 Características de la prueba digital

Las propiedades de la prueba digital hacen que sea necesario un tratamiento distinto al de los medios probatorios convencionales. Vázquez (2022) señala que este tipo de prueba necesita especialización para su aplicación, práctica y evaluación (p. 45), mientras que Martínez (2022) enfatiza que se requiere de soportes o herramientas para poder ver la información digital (p. 7). Los dos escritores están de acuerdo en que el juez no tiene la facultad de limitarse a examinar el contenido final, sino que también debe tomar en cuenta el proceso técnico que hizo posible su creación, extracción, conservación y reproducción durante el procedimiento.

- La intangibilidad: en contraste con el documento físico, la prueba digital se compone de información que necesita un aparato, software o proceso técnico para su lectura. Según sostiene Martínez (2022), para que la información digital pueda ser apreciada en términos judiciales, debe ser convertida a un formato que sea comprensible (p. 7). Esta situación exige que el juez explique con más exactitud cómo accedió al contenido, qué métodos empleó para revisarlo y por qué el contenido tiene capacidad de prueba.

- La Replicarla: según Martínez (2022), la información que se almacena en formato digital puede ser duplicada o copiada indefinidamente (p. 8). Esta opción no elimina su valor como prueba, sin embargo, requiere procedimientos de verificación que hagan posible diferenciar una copia confiable de una reproducción manipulada. La cadena de custodia digital, los metadatos, la firma electrónica, el hash, las copias de seguridad certificadas y la intervención pericial son relevantes aquí cuando haya una disputa acerca del origen o la integridad del archivo.

- La volatilidad: según Casey (2011), ciertos datos pueden perderse de forma irreversible si se desconecta, apaga o modifica un sistema de computación (p. 389). Este aporte se relaciona con el concepto de intangibilidad, ya que la prueba digital no solo necesita medios técnicos para su comprensión, sino también acciones adecuadas para su conservación. La tardanza en obtenerla puede tener un impacto negativo en la efectividad probatoria y suscitar interrogantes acerca de su autenticidad, particularmente en registros de acceso, publicaciones en redes sociales, archivos almacenados en la nube, historiales o mensajes.

- La autenticidad e integridad: de acuerdo con Reyes (2024) señala que la autenticidad hace posible comprobar que la prueba es de la fuente a la que se le atribuye y que no ha sido alterada (p. 4). Esta noción debe ser complementada con la integridad, la cual se entiende como la permanencia total e invariable del contenido desde que es creado o recolectado hasta que se incorpora al proceso. Una prueba puede provenir de una fuente identificable, pero perder eficacia si su contenido ha sido modificado; por esta razón, la autenticidad y la integridad deben ser analizadas juntas.

Estos rasgos tienen un impacto directo sobre la motivación judicial. El juez debe determinar durante la evaluación de una prueba digital si la información fue obtenida legalmente, si está relacionada con los hechos en disputa, si cuenta con el soporte técnico correspondiente y si las partes implicadas tuvieron la oportunidad de debatirla. Si lo mencionado no se considera, la valoración puede llegar a ser solo un referente formal de la prueba, lo cual no satisface el estándar constitucional de motivación apropiada.

2.2.3 Admisión de la prueba digital

La admisión de la prueba digital es el primer filtro jurisdiccional para establecer si se puede incluir un componente tecnológico en el proceso de manera válida. Arreaga (2021) establece que la admisibilidad es el examen que lleva a cabo el juez para autorizar la realización de pruebas durante el juicio (p. 46). Por su parte, Bujosa et al. (2021) la relacionan con la evaluación de las condiciones del medio o actividad probatoria sugerida (p. 1368). Al contrastar ambas posturas, se observa que la admisibilidad no constituye un procedimiento mecánico, sino una evaluación preliminar que evalúa la pertinencia, utilidad, funcionalidad y legitimidad del medio de comprobación.

En el artículo 160 se indica que la prueba debe ser apropiada, útil, conducente, además, debe efectuarse conforme a la legislación, con fidelidad y veracidad (COGEP,2015). Siendo así, que, al hablar de la prueba digital, estos criterios adquieren una interpretación mucho más rigurosa: la pertinencia supone que la prueba digital tiene una relación directa con los hechos que están en controversia; la utilidad exige que este elemento tenga una capacidad veraz que aporte información en el proceso; la conducencia implica que sea jurídicamente idónea para demostrar lo que se está alegando; y la licitud solicita que no haya violado ningún derecho constitucional, la protección de datos y la privacidad.

Cuando la evidencia proviene de mensajes, archivos creados por aplicaciones, videos, correos electrónicos, capturas de pantalla o audios, es necesario una mayor complejidad para su admisión. De acuerdo con Reyes (2024), la falta de protocolos apropiados, como la cadena de custodia digital, puede producir carencias en la valoración e integración de esta categoría. Esta observación tiene la posibilidad de ser aplicada en Ecuador, donde el marco legal permite documentos y mensajes electrónicos, no obstante, no siempre establece lineamientos sobre la verificación técnica, la preservación o la contradicción procesal.

Cabe mencionar, que la prueba digital solo será admisible en el proceso si existen los suficientes elementos para establecer su origen, así como la forma en la que fue obtenida, su integridad y la relevancia que tiene para el proceso. Si las partes cuestionan cualquiera de estas

condiciones, puede que sea necesario la participación de expertos o la prestación de apoyo técnico especializado para garantizar que las decisiones judiciales no se basen en pruebas digitales que no hayan sido verificadas previamente.

2.2.4 Valoración de la prueba digital

La valoración de la prueba digital tiene lugar cuando el juez decide qué fuerza probatoria tiene el elemento que se incluye en el proceso. Según Montenegro (2022), las pruebas tienen que ser analizadas en su totalidad, encontrando conexiones directas e indirectas, sin separar un medio probatorio de los demás elementos procesales (p. 7). Velaña (2021) señala, por otro lado, que la crítica sana sitúa el juicio entre la prueba tasada y la libre convicción, guiando al juez a través de normas de lógica, experiencia y conocimiento científico (p. 56). La correlación entre los dos criterios permite concluir que la prueba digital tiene que ser evaluada de manera integral, pero con el respaldo de criterios técnicos verificables.

En el COGEP, se dispone que la prueba debe ser evaluada de manera integral y siguiendo los parámetros de la sana crítica; obligando al juez a exponer su criterio sobre las pruebas que están siendo presentadas (COGEP, 2015, art, 164). Es así, que, en el ámbito digital, esta exigencia no se cumple con expresiones generales como: se acepta la prueba o se considera válida. Una adecuada motivación debe dar respuestas a interrogantes específicas, como son: ¿por qué el contenido digital es auténtico?, ¿qué argumentos sostienen su integridad?, ¿cómo se relaciona con los hechos controvertidos? y ¿por qué esto resulta suficiente o insuficiente frente a los otros medios de prueba?

La integridad y la autenticidad deben ser verificadas para valorar la prueba digital en Ecuador, de acuerdo con Oleas (2023), ya que el fácil manejo de la tecnología puede poner en riesgo la seguridad jurídica. Esta perspectiva concuerda con Meza (2024), quien subraya la importancia de herramientas como la firma electrónica para verificar que el documento no ha cambiado. La comparación entre las autoras posibilita sostener que la apreciación no se fundamenta solamente en la presencia de un archivo digital, sino en el nivel de confianza que el sistema procesal y técnico produce sobre su conservación y origen.

En la prueba digital, la toma de conocimiento judicial cuenta con tres niveles. El primero se relaciona con el aspecto jurídico, y se refiere a la licitud, la utilidad, la conducencia y la pertinencia. El segundo es técnico, relacionado con la trazabilidad, integridad, metadatos, autenticidad, hash o firma electrónica. El tercero lo es en forma de argumento y se refiere a cómo el juez expresa la relación entre las pruebas de origen digital y la decisión que adopta el juez mediante la misma. La ausencia de cualquiera de estos niveles puede influir en la motivación judicial y, por lo tanto, en la validez del fallo.

2.3 Motivación judicial en el proceso civil ecuatoriano

2.3.1 Conceptualización de la prueba judicial

La motivación judicial es un requisito de legitimidad para las decisiones jurisdiccionales y además es una garantía del debido proceso establecida por la Constitución. La Corte Constitucional del Ecuador ha establecido que la garantía de motivación es un componente del derecho a la defensa y está prohibido tomar decisiones arbitrarias (CCE, Sentencia 1852-21-EP/25, 2025, párr. 13). Liza Castillo (2022) está de acuerdo en que para motivar es necesario presentar de manera clara y ordenada los fundamentos jurídicos y fácticos que apoyan la decisión (pp. 295-296). Los dos criterios indican que motivar no es simplemente citar normas de forma aislada, sino justificar lógicamente la decisión tomada.

Alcivar y Estrella (2025) desarrollan este concepto al afirmar que la motivación ejerce un rol de control tanto epistémico como democrático, ya que obliga al juez a declarar los motivos de su resolución y posibilita comprobar la racionalidad de la interpretación normativa (p. 547). Este aporte es importante para valorar la prueba digital, porque el juez no solo tiene que justificar la norma empleada, sino también los estándares técnicos que se usaron para aceptar, descartar o restar valor a un medio probatorio de carácter tecnológico.

Cuando la motivación judicial, se aplica a la prueba digital, el juzgador no puede limitarse únicamente a vincular los hechos y las normas, siempre debe ir más allá e incorporar estándares técnicos. Una resolución que omita el pronunciamiento de la autenticidad, la integridad o la fiabilidad del soporte digital, corre el riesgo de que aparentemente parezca fundamentada, pero no tenga una justificación adecuada sobre los aspectos cruciales del debate probatorio.

2.3.2 Debido proceso

El debido proceso constituye una garantía fundamental, dado que asegura que cada acción judicial, respete los derechos de las partes que se encuentran involucradas. Incluyendo la opción de presentar pruebas, refutarlas, recibir una decisión debidamente fundamentada y utilizar todos los recursos que se encuentran establecidos por la ley en el proceso civil. Castelo y Hidalgo (2024) afirman que el debido proceso es aquel que garantiza la observancia de los procedimientos legales que ayudan a salvaguardar derechos y libertades, entre ellos el derecho a presentar pruebas (p.26). Esta postura tiene un respaldo en la jurisprudencia nacional, ya que define al debido proceso como aquel conjunto de garantías que busca proteger a las partes en todo asunto de temas jurisdiccionales.

La Constitución de la República del Ecuador garantiza el debido proceso en cada procedimiento donde se definan derechos u obligaciones (artículo 76) (CRE, 2008). Este mandado establece que, en lo concerniente a la prueba digital, el medio tecnológico presentado por una de las partes puede ser mostrado bajo circunstancias procesales adecuadas. La contraparte puede tener una oportunidad para interrogar y el magistrado establezca su eficacia probatoria por medio de argumentos verificables y precisos.

2.3.3 Tutela judicial efectiva

La tutela judicial efectiva es el acceso a la justicia y una respuesta razonada, imparcial y ejecutable. Carrasco (2020) aclara que esta garantía incluye el acceso a la jurisdicción, el procesamiento del caso, la solución y la implementación de una sentencia definitiva (p. 20). Desprendiéndose así que la tutela judicial efectiva no se agota cuando el juez recibe una

demanda o realiza una audiencia, sino que, su cumplimiento se da cuando se realizada un veredicto final donde se haya valorado de manera minuciosa y rigurosa de todos los elementos probatorios.

La prueba digital está ligada a la efectividad de la tutela judicial en el proceso civil ecuatoriano. El juez tiene la obligación de dar una respuesta fundamentada sobre la efectividad de los correos electrónicos, archivos digitales, documentos electrónicos, mensaje de datos o registro de plataformas cuando una parte base sus pretensiones en ellos. Al no realizar este análisis, las partes pueden quedar en desventaja, puesto que no entienden el motivo por el cual se aceptó, valoró o rechazó con cierto alcance un componente tecnológico.

2.3.4 Criterios de la motivación judicial

Para ratificar la validez de una decisión, se necesitan criterios claros que se encuentren debidamente sustentados en la motivación judicial, por ello, según Delgado (2021), ya que los motivos presentados en la decisión pueden ser cuestionados y revisados por la entidad competente (p.122). Entendiéndose que respecto a la prueba digital, se deben tener tres criterios fundamentales, los cuales son la: razonabilidad, congruencia y suficiencia.

- La motivación suficiente, es aquella que requiere que la sentencia incluya razones específicas para entender la decisión. Según Ricaurte (2023), la suficiente se refiere a los requisitos básicos que una argumentación necesita para ser vista como una motivación (p. 34). Siendo así que la Corte Constitucional de Ecuador ha afirmado que la motivación adecuada es aquella que se puede llevar a cabo el derecho a la defensa ante acciones del poder público. (CCE, Sentencia No. 1158-17-EP/21, 2021, párr. 24). Indicando, que al momento de aplicarlo en la prueba digital, se necesita que el juez explique el valor judicial que tiene el archivo, mensaje, registro o documento electrónico que se encuentra incluido dentro del proceso.

- La motivación congruente requiere que haya coherencia entre lo solicitado, lo comprobado y lo acordado. Cueva (2013) establece que la congruencia está relacionada con la armonía entre las pretensiones de las partes y la sentencia (p. 16), por su parte, Bajaña Tovar (2025) sostiene que cuando se omiten argumentos importantes del debate judicial, hay incongruencia (p. 70). En el análisis de prueba digital, la congruencia evita que el juez no tome en cuenta un medio tecnológico crucial o que decida sobre cuestiones que las partes no han discutido.

- La motivación razonada es aquella donde el juzgador se basa en un razonamiento lógico, no en una valoración arbitraria. Cerdán (2023) indica que, la racionalidad debe estar presente en los presupuestos del razonamiento judicial y en el contexto de su aplicación (p. 391). Mientras que, Milione (2015) completa esta noción, señalando que la motivación ha de dejar claro que el fallo es una decisión jurídicamente fundamentada y no solo un acto de voluntad (p. 175). En el análisis de la prueba digital el juzgador debe explicar cómo implica la razonabilidad con el soporte tecnológico de los hechos que están siendo probados con la norma jurídica aplicable en el caso.

2.3.5 La motivación judicial y la prueba digital

La motivación judicial y la prueba digital están particularmente conectadas, ya que la efectividad del medio tecnológico se basa en una justificación que mezcle criterios técnicos y jurídicos. Según Taruffo (2006), la motivación de la sentencia civil es una argumentación con fines justificativos, con el objetivo de ofrecer un razonamiento lógico acerca de la decisión (p. 17). El juez, al valorar la prueba, tiene que analizar los elementos proporcionados por las partes para identificar los hechos afirmados (Escobar Pérez, 2010, p. 59). Destacando que la prueba digital adquiere un carácter determinante cuando el juzgador, a través de un análisis jurídico y lógico, logra que se acrediten los hechos con trascendencia legal utilizando elementos técnicos.

La motivación debe identificar qué factores o herramientas permitan descartar posibles alteraciones de las pruebas digitales, así como el modo en la que fue incorporada dentro del

proceso, como se vincula este contenido con los hechos objetos de controversia y el respaldo técnico que garantice la autenticidad de la prueba sin que solamente se dé la constatación de la existencia de un mensaje, audio, video o archivo de naturaleza digital .Esto ocurre porque si no se da la justificación, la sentencia puede presentar pruebas insuficientes, aparentes o incoherentes que repercute en la protección judicial y el proceso.

Con lo mencionado se destaca que se requiere una motivación para la evaluación digital. Esta requiere que el magistrado implemente las reglas procesales, los principios de razonamiento crítico, los informes periciales y los elementos de contradicción presentados por las partes para mejorar la decisión. Así, la motivación judicial pasa a tener un vínculo entre la confiabilidad técnica de las pruebas digitales y la legitimidad constitucional del fallo.

2.3.6 Experiencia internacional sobre la valoración de la prueba digital y comparación con Ecuador

A nivel internacional se menciona que la evaluación de la prueba digital ha desarrollado varios criterios centrados en la autenticidad, integridad, preservación, contradicción y equivalencia funcional. Cabe recalcar que cada país tiene diferencias particulares a nivel de detalles técnicos, como son Colombia, Argentina, España y Estados Unidos, mismos que reconocen la utilidad de documentos, mensajes o registros en formatos electrónicos durante los procesos judiciales. Resultando esta comparación de gran resultado a Ecuador, dado que demuestra que el reconocimiento normativo que se tiene es insuficiente por sí solo, necesitando criterios claros de verificación y una motivación judicial firme.

En el caso de España, se evidencia la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde este acepta los medios de reproducción de palabra, sonido e imagen, además de herramientas que ayudan el archivo, la compresión y la reproducción de información relevante para el proceso (Ley 1/2000, 2000, arts. 299 y 384). Por su parte Colombia, es su Ley 527 de 1999, reconoce la validez de los mensajes de datos y establece que su fuerza probatoria debe evaluarse teniendo en cuenta la fiabilidad del proceso de generación, archivo, comunicación e integridad de la información (arts. 5, 10 y 11). Demostrando que ambos modelos aportan elementos valiosos para el sistema

ecuatoriano, dado que: Colombia fija criterios de confiabilidad para los mensajes de datos, mientras que España incorpora una regulación procesal concreta para las herramientas tecnológicas.

Argentina, mediante la Ley 25.506, en sus artículos 2, 5, 6, 7 y 8, mencionan que el documento digital es aquel que puede ser verificado mediante una firma digital; recalcando, que reconoce la firma digital y la firma electrónica, estableciendo presunciones de integridad y autoría. Por otra parte, Estados Unidos regula la autenticidad probatoria a través de las Federal Rules of Evidence: la Regla 901 requiere pruebas suficientes para afirmar que el elemento es lo que dice la parte, y la Regla 902(13) y (14) permite autenticar mediante certificación de registros producidos por procesos electrónicos o copias de información extraídas de dispositivos, soportes o archivos digitales (Federal Rules of Evidence, 2024, reglas 901 y 902). Demostrando con ello que estos marcos normativos constan con estándares claros de certificación y autenticación técnica lo que ayuda a fortalecer la confiabilidad de la prueba digital dentro del proceso.

A pesar de no ser un país, la Unión Europea proporciona una guía importante a nivel regional a través del reglamento eIDAS. Este reglamento impide rechazar efectos jurídicos o la admisibilidad de una firma electrónica por su formato digital y acepta efectos probatorios para los registros electrónicos cualificados y sellos temporales (Reglamento (UE) n.º 910/2014, arts. 25, 41 y 45k). En Ecuador, esta experiencia podría representar una política procesal enfocada en reforzar la firma electrónica, la conservación digital, la validación regular de documentos electrónicos y el sellado temporal.

De igual manera en este país, hay normativas relevantes como el COGEP, los Mensajes de Datos, las Firmas Electrónicas y la Ley de Comercio Electrónico. Sin embargo, la normativa sigue siendo fragmentada y no ha establecido un protocolo específico para evaluar judicialmente las pruebas digitales. A pesar de ello, se puede implementar cuatro estrategias para que la motivación se base en una fundamentación verificable y objetiva:

- Aumentar el uso de sellos temporales, firmas electrónicas y peritajes informáticos.

- Requerir una cadena de custodia digital para respaldar la autenticidad, la integridad, la conservación y la trazabilidad.

- Brindar capacitaciones a los magistrados y abogados con el fin de proporcionales la capacidad de interpretar de manera adecuada las evidencias tecnológicas.

- Contar con una cadena de custodia digital cuando se discuta sobre las pruebas.

A continuación se realiza una tabla explicativa, donde se evidencian las principales características y diferencias que tienen estas leyes, respecto a la normativa ecuatoriana:

Tabla 1

Comparación internacional sobre la valoración de la prueba digital

Jurisdicción	Base normativa	Criterios aplicados	Comparación con Ecuador
España	Ley de Enjuiciamiento Civil, arts. 299, 383 y 384.	Acepta medios de reproducción, archivos de datos, documentación en autos, custodia y evaluación según juicio sano.	Ecuador admite documentos digitales, pero no les da el mismo grado de atención a la custodia y a la documentación de los equipos tecnológicos. Es posible aplicar patrones para la conservación, la contradicción técnica y la reproducción pública.
Colombia	Ley 527 de 1999, arts. 5, 10, 11 y 12.	Reconoce los mensajes de datos, el	Si bien el Ecuador reconoce el principio de equivalencia

		principio de equivalencia funcional, la integridad, la conservación y la valoración que haya sido sustentada en criterios de confiabilidad.	funcional, esta resulta necesario establecer criterios específicos como es en materia de comunicación, archivo, producción e identificación del iniciador e integridad del mensaje de datos.
Argentina	Ley 25.506, art. 2, 5, 6, 7, 8, 11 y 12.	Comprueba archivos digitales, presunción de autoría, la firma digital, el valor probatorio y la presunción de integridad de los documentos originales en su formato digital.	En Ecuador se acepta la firma electrónica, pero para que funcione en la práctica judicial es necesario estandarizar más el proceso de verificación mediante sellos de tiempo, respaldos técnicos y certificados.
Estados Unidos	Federal Rules of Evidence. Reglas 901, 902 (13), 902 (14), 1001 y 1003.	Posibilita certificaciones para datos recabados de correo electrónico, dispositivos, soportes o archivos a más de solicitar autenticación.	No tiene normativas específicas para los procedimientos de certificaciones técnicas. Sin embargo, admiten certificaciones periciales de expertos relacionados con el hash, la copia forense, precisión de resultados y extracción de datos.
Unión Europea	Reglamento (UE) n.º 910/2014, arts. 25, 41 y 45k.	Reconoce la validez del formato electrónico y acepta firmas electrónicas,	La implementación de la validación técnica interoperable, sellado temporal y el archivo digital

		los sellos de tiempo y los registros electrónicos calificados.	seguro posibilitaran a Ecuador la viabilidad de establecer una trazabilidad probatoria y objetiva.
Ecuador	COGEP, arts. 160, 164 y 202; Ley de Comercio Electrónico, arts. 2, 14, 52 y 55.	Reconoce mensajes de datos y documentos digitales, la evaluación se realiza conforma a estándares de juicio crítico, confiabilidad y seguridad.	La regulación no es centrada, pero está presente. Es recomendable establecer un protocolo judicial que contemple la autenticidad, integridad, cadena de custodia digital, pericia y motivación reforzada.

Nota: Comparación de normativa entre España, Colombia, Argentina y EE. UU.

2.4 Marco normativo

2.4.1 Normativa aplicable a la prueba digital

Constitución de la Republica del Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador [CRE] (2008), en el orden jerárquico ocupa el lugar más alto, conformando con ello la supremacía constitucional, la que por medio de ella constituye el punto de partida para la regulación del tratamiento de la prueba digital dentro de los procesos civiles ecuatorianos. Es así como en este cuerpo normativo en su artículo 76 en su numeral 4 establece que: "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria" (CRE, 2008, Art.76, num4).

Cabe recalcar que la obtención de la prueba debe ser licita para que la misma tenga validez dentro del proceso, delimitando con ello que toda prueba que haya vulnerado derechos

constitucionales o disposiciones legales las mismas que carezcan de eficacia probatoria, no tendrán validez dentro del proceso. Sin embargo, el juzgador será el encargado de verificar el contenido de la prueba digital, además de analizar la obtención de la prueba digital, situación que es indispensable para que la misma pueda ser valorada y sirva de fundamento para la correcta motivación.

En continuidad en concordancia, podemos mencionar que en el mismo cuerpo normativo en su artículo 66, numeral 10, se establece una garantía fundamental, la misma que se encuentra vinculada con el tratamiento de la prueba digital, dado que se reconoce el derecho a la protección de datos, así como la exigencia de una autorización para que se dé la recolección y distribución de dicha información, mencionando textualmente que:

> El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. (CRE, 2008, Art.66, num10)

Estableciendo con ella una relevancia fundamental, dado que la información que se obtenga de la prueba digital, muchas veces esta es de carácter personal, es por ello que la misma debe ser obtenida de manera limitada, es así como toda recolección que se realice de manera arbitraria o que no exista un respaldo legal de la obtención de dicha prueba, esta carecerá de eficacia probatoria dentro del proceso. Reforzando con ello que los juzgadores verifiquen de manera rigurosa la obtención de dicha prueba, para que esta pueda ser admitida dentro del proceso, además de verificar la legitimidad constitucional del procedimiento por el cual fue obtenida dicha prueba.

Otro de los puntos importante a tratarse, respecto a la lo que nos otorga la normativa suprema, es la seguridad jurídica, la misma que es pieza fundamental, dado que esta es una garantía que

adquiere una relevancia debido a los vacíos legales que existen a la hora del tratamiento de la prueba digital, es por ello que en la CRE en su artículo 82 nos menciona que: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. (Art.82).

A continuación de esta disposición, se evidencia que el Estado está obligado a precautelar la existencia de nomas claras, específicas y accesibles las mismas que ayudaran a la regulación del tratamiento de la prueba digital. Sin embargo, la falta de regulación sistemática no solo compromete la efectividad de este principio es por ello por lo que Vargas (2023) menciona que la seguridad jurídica no debe entenderse como un fin íntegro, sino como un medio de garantía de otros derechos y bienes jurídicos, permitiendo la efectivización de otras garantías dentro del proceso. (pag.3).

Código Orgánico General de Procesos

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano se ha desarrollado de una manera progresiva en un conjunto de normativas, las mismas que ayudan a la regulación de la prueba digital dentro de los procesos judiciales. Cabe recalcar que estas regulaciones no se encuentran consolidadas en un solo cuerpo normativo único, siendo posible identificar artículos dispersos en varios cuerpos legales, lo que en conjunto ayudan a que se configure el marco jurídico aplicable para el tratamiento de la prueba digital.

Es así como en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP,2015) estable en su artículo 158 que: “La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos” (Art.158). Constituyendo con ello un punto de partida para el rol que cumple la prueba digital dentro del proceso civil, pues con ello se delimita cual es la finalidad de esta prueba, generando con ello una convicción judicial, tratando con ello que el juzgador de justicia no solo debe comprender el contenido de un documento electrónico, mensaje de datos o registros digitales que existan, sino debe valorar la autenticidad, integridad

y originalidad, aspectos fundamentales para la introducción de la prueba dentro de un proceso judicial.

En este sentido, Galarza señala que:

> La prueba, como mecanismo del derecho probatorio, se erige, así como la herramienta esencial cuya finalidad es la de demostrar un hecho: la que para que tenga valor y eficacia, deberá cumplimentar principios y exigencias formales y legales. Así, cuestiones tales como pertinencia, utilidad, necesidad, legalidad, conducencia entre otras, provocan en la prueba y en la actividad probatoria, un cúmulo de condiciones que favorecen su admisibilidad y eficacia, y ejercen influencia sobre la postura del juzgador. (Pág.74)

Sin embargo, en un contexto digital, se entiende que el juzgador no solo debe comprender el contenido del documento electrónico, sino además que debe evaluar los diferentes aspectos importantes de este hecho, ejerciendo así una influencia directa sobre la postura la cual toma el juzgador frente a la prueba presentada.

En cuanto a los requisitos que debe reunir la prueba, para que la misma sea admitida dentro del proceso en el COGEP, en su artículo 160 establece en su parte pertinente que: "Para ser admitida, la prueba debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia y se practicará según la ley, con lealtad y veracidad" (Art.160). Estableciendo con ello que le juzgador antes de admitir dicha prueba debe comprobar si esta tiene la validez necesaria, para que la misma pueda ser incorporada al proceso, este filtro adquiere una relevancia especial, debido a que al ser una prueba digital puede existir ciertas dificultades para que exista la verificación de los requisitos que debe cumplir la prueba digital.

En tal sentido, cuando la prueba no cumpla con estos parámetros, el mismo puede desestimar esta prueba, debido al hecho que, al ser una prueba digital, la obtención de esta haya vulnerado derechos fundamentales como es la intimidad o la protección de datos, los mismos que se encuentran establecidos en el artículo 66 numeral 19 de la Constitución de la República. Estableciendo que el juzgador es quien realiza el control de admisibilidad de la prueba, para que la misma pueda ser admitida dentro del proceso, verificando la licitud del procedimiento por medio del cual fue receptada dicha prueba, antes que la misma pueda ser incorporada dentro del proceso.

En concordancia con lo expuesto anteriormente en el artículo 161 determina que "La conducencia de la prueba consiste en la aptitud del contenido intrínseco y particular para demostrar los hechos que se alegan en cada caso." (COGEP, art.161). Interpretando con ello que, a la hora de la incorporación de la prueba digital, debe acreditar el hecho controvertido que se está poniendo en juego, siendo así que la información debe guardar una correlación directa o indirectamente con los hechos, condición por la cual el juzgador será quien califique su admisibilidad, evitando con ello que la información digital que no sea relevante no dificulte la búsqueda de la verdad procesal que se está estableciendo.

En cuanto a la incorporación de la prueba digital, en el COGEP, podemos encontrar los documentos digitales, en su artículo 117 reconoce la posibilidad de adjuntar a los actos procesales electrónicos documentos digitalizados o escaneados de distinta naturaleza, incluyendo textos, sonido e imágenes. Asimismo, se dispone que aquellos documentos que no puedan ser digitalizados por su volumen o ilegibilidad deberán ser presentados de manera física en la unidad judicial hasta el día siguiente en la que fue presentada la petición electrónica. (COGEP, 2015, Art. 117).

Reconociendo la posibilidad de poder adjuntar documentos ya sean digitalizados o escaneados, teniendo una relación con el tratamiento de los documentos físicos, los cual ayuda a evidenciar que existe un reconocimiento normativo respecto a la prueba digital como un medio de prueba valido. Sin embargo, no existe un establecimiento de criterios específicos sobre la autenticidad

o integridad de los documentos digitales, generando un vacío legal que prueba comprometer a la valoración de la prueba digital. Determinando que la ausencia de estos parámetros constituye uno d ellos problemas más visibles, razón por la cual dicha omisión dificulta que el juez pueda motivar de manera adecuada.

Se debe tener en cuenta que en el artículo 193 del COGEP define la prueba documental de una manera amplia ya sea como un documento público o un documento privado, los mismos que son evidencia para la autenticidad de un hecho, es por ello qué el artículo 202 del mismo cuerpo legal dispone que los documentos que sean generados electrónicamente tienen un valor de originales para los efectos legales, es por ello que se otorga la misma fuerza probatoria a las reproducciones digitalizadas o escaneadas respecto de los documentos físicos originales. Asimismo, se dispone que los documentos originales escaneados deberán ser conservados por su titular y presentados ante el juzgador cuando él lo amerite, admitiendo todo contenido digital como medio de prueba conforme a las disposiciones del mismo cuerpo normativo (COGEP, 2015, Art. 202).

Constituyendo con ello uno de los criterios más importantes respecto a la prueba digital, dado que otorga una fuerza probatoria a la prueba digital, la misma que la prueba documental, lo que representa un avance normativo, pues se elimina una berrera entre ambos soportes probatorios. Cabe recalcar que, a pesar de presentar una prueba digital, la norma establece que se debe tener estar prueba digitalizadas o escaneadas, no obstante, el hecho que se establezcan criterios específicos, el juzgador aún carece de normativa suficiente donde se le permita evaluar la autenticidad, integridad y fiabilidad de estas pruebas. Cobrando una relevancia bastante significativa, dado que la prueba digital, tiene el riesgo de ser alterado, manipulado o reproducido; siendo así que estos puntos deben ser valorados una vez que las pruebas sean puestas a conocimiento del juzgador.

Siendo analizadas las limitaciones técnicas que sufre el juzgador a la hora de valorar la prueba digital, el COGEP, menciona un mecanismo de ayuda para que pueda existir una valoración justa, y la misma es por medio de un perito especializado, es así que en el artículo 221, define

al perito como aquella persona natural o jurídica que, en virtud de sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales, se encuentra en condiciones de ilustrar al juzgador sobre los hechos o circunstancias vinculados a la materia de controversia (COGEP, 2015, Art. 221).

Teniendo que la intervención pericial dentro de la prueba digital adquiere una vital importancia, ya que por medio de este se da un criterio técnico necesario para la comprensión y valoración de la prueba. Al respecto, Gómez (1974) señala que el juzgador no puede dominar todos los campos de conocimiento científico y técnicos, razón por la cual resulta indispensable la participación de peritos especializados y acreditados dentro del proceso, cuya intervención se perfecciona conforme avanza la ciencia y la tecnología aportando con ello una mayor objetividad a la valoración probatoria. (p.44).

Sosteniendo que es fundamental un criterio pericial, lo que ayuda a que se dé una práctica judicial adecuada para la valoración de la prueba digital dentro del proceso civil.

Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos

La ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (LCEFEMD) descrita en el Registro Oficial Suplemento N.-557 del 17 de abril del 2002, se encuentra en el marco aplicable. Esta constituye un cuerpo normativo, donde se regula los mensajes de datos, firmas electrónicas y los documentos electrónicos, teniendo con consideración que esta normativa se encuentra mayormente direccionada al comercio electrónico, existen ciertas relevancias directas que ayudan a la prueba digital. Estableciendo con ello un valor jurídico a los documentos y mensajes de datos, que mayormente son presentados dentro de los procesos civiles.

En el artículo 2 de la LCEFEMD estable lo siguiente: “Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta ley y su reglamento.” (Atr.2). Consagrando una pieza fundamental al principio de equivalencia funcional, la cual para Landaéz Otazo & Landaéz Arcaya (2007), menciona que “La función jurídica que cumple la instrumentación mediante soportes documentales en papel y firma autógrafa respecto de todo acto jurídico, la cumpla igualmente la instrumentación electrónica a través de un mensaje de datos”. (p.17). Donde tras un análisis, se pude determinar que en el ordenamiento jurídico se elimina una distinción jerárquica entre los documentos físicos y el mensaje de datos.

Cabe recalcar que se permite que correos electrónicos, registros digitales, mensajes de texto y demás contenidos electrónicos puedan ser estos presentados y valorados como una prueba de igual condición dentro del proceso. Sin embargo, existe un condicionamiento a la hora del cumplimiento de los requisitos previos para la valoración de la prueba digital, lo que implica que el juzgador es quien debe verificar este hecho y observar si cumple con las exigencias legales requeridas.

En concordancia con antes expuestos, en el artículo 14, se dispone lo siguiente: "La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio" (Art. 14, LCEFEMD). Determinando con ello que la firma electrónica representa uno de los mecanismos las solidos para garantizar de la prueba digital la integridad y autenticidad.

Sin embargo, la sola presencia de la firma electrónica no garantiza la integridad de la prueba, es por ello por lo que el juzgador es quien debe realizar un análisis exhaustivo, así como otros elementos de convicción, para que se la verificación de dicha prueba. O para que exista una mayor seguridad de la valoración de dicha prueba, la misma sea evaluada por un perito especializado en la materia.

Respecto a los medios de prueba electrónicos, los mismos que se encuentran reconocidos en el mismo cuerpo legal en su artículo 52, donde nos establece que: "Los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos y los certificados electrónicos nacionales o extranjeros, emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera sea su procedencia o generación, serán considerados medios de prueba" (Art.52, LCEFEMD). Existiendo una ampliación al reconocimiento de los medios de prueba, otorgando con ello una respuesta positiva a la incorporación de la prueba digital, así como la independencia de su procedencia o forma de generación. Sin embargo, aún sigue existiendo vacíos legales, dado que las normas responden de manera general.

Como último punto relevante, se determina el artículo 55, en el cual se establece que la prueba digital sea valorada, tomando en cuenta que:

> "...la seguridad y fiabilidad de los medios con los cuales se la envió recibió, verificó, almacenó o comprobó si fuese el caso, sin perjuicio de que dicha valoración se efectúe con el empleo de otros métodos que aconsejen la técnica y la tecnología. En todo caso la valoración de la prueba se someterá al libre criterio judicial, según las circunstancias en que hayan sido producidos..." (Art.55, LCEFEMD).

Cabe recalcar que, para la valoración de la prueba, se introducen parámetros técnicos concretos como es la seguridad y la fiabilidad. Sin embargo, se determina que debe existir una libertad de criterio por parte del juzgador, ya que no se puede establecer como va a integrar su razonamiento en dicha motivación.

Al respecto de esto, Sani (2025) menciona que la valoración de la prueba digital "deberá cumplir con los preceptos establecidos en la ley, siempre y cuando doten de fiabilidad y seguridad a dichos medios, empleando métodos, técnicas y tecnología adecuada para un libre criterio judicial." (p.36), endureciendo que la valoración de dicha prueba debe tener una

evaluación técnica debidamente sustentada, aunque las normas vigentes no garanticen de manera explícita este hecho, por lo cual se compromete de manera directa la objetividad de la motivación judicial.

Normativa aplicable a la motivación judicial

La motivación jurídica en el marco normativo ecuatoriano se encuentra en el conjunto de una estructura jurídica, desde la norma suprema hasta el derecho procesal, creando con ello un sistema jurídico coherente y articulado donde en el mismo se obliga a los operadores jurídicos a justificar de manera adecuada sus decisiones. Entendiéndose así que este no es solo un requisito formal, sino es una respuesta para la transparencia, racionalidad y legitimidad de las sentencias judiciales, como uno de esos casos son en los procesos civiles donde se valoran pruebas de alta complejidad como la prueba digital.

Constitución de la República del Ecuador

En la norma suprema, se entiende que en el artículo 76 núm. 7 literal l) de la Constitución, donde establece que las decisiones que sean tomadas por los juzgadores deben ser motivadas, además de mencionar que si en la resolución no se especifica los principios jurídicos y las normas en los que se basa, además, no se explica la coyuntura de su aplicación a los datos reales, determinado que esto se consideran actos, decisiones y decisiones administrativas que no se consideran responsables y justificables. Cabe recalcar que la motivación no es la discrecionalidad del juez, sino que esta es una exigencia constitucional de ejecución obligatoria, donde si se da este incumplimiento queda invalidada esta sentencia judicial.

Adicionalmente, en el artículo 169 de la CRE, relaciona esta obligación en la realización de la justicia y sobre las normas procesales que hacen que sea efectivas estas garantías del debido proceso, tratando de que no se ofrende la justicia por la omisión de las formalidades. En este sentido, Taruffo (2006) menciona que la motivación en la sentencia civil es aquella que se

constituye por medio de un discurso justificativo, el mismo que se encuentra compuesto por un conjunto ordenado de proposiciones el cual tiene por objetivo proporcionar una justificación racional de las decisiones judiciales (p.17). Dando con ello que la Constitución es aquella que ayuda a que se configure la motivación judicial como una garantía sustancial del debido proceso, y las mismas que se adecúen en el marco del proceso civil, específicamente en la valoración de la prueba digital.

Código Orgánico General de Procesos

El Código Orgánico General de Procesos constituye el principal cuerpo normativo procesal del Ecuador y desarrolla de manera específica la obligación de motivar las decisiones judiciales, estableciendo los parámetros y requisitos que deben observar los juzgadores al momento de fundamentar sus resoluciones dentro del proceso civil. En este sentido, el artículo 89 del COGEP dispone que toda sentencia y auto serán motivados bajo pena de nulidad, adicionalmente, se establece que, si no se mencionan las normas o principios jurídicos que respaldan la fundamentación y no se explica la importancia de aplicarlas a los antecedentes de hecho, no habrá motivación. Se establece que las sentencias se motivarán mediante la exposición de razonamientos fácticos y jurídicos que propician la valoración, apreciación de las pruebas, la aplicación del derecho y la interpretación (COGEP, 2015, art. 89). Entendiéndose con ello que la motivación en el proceso civil ecuatoriano no se agota en la simple cita de normas jurídicas, sino que exige un razonamiento completo que abarque tanto la dimensión fáctica como la jurídica de la decisión adoptada.

Complementando lo anterior, el artículo 90 del COGEP establece que todo pronunciamiento judicial escrito deberá contener entre sus elementos esenciales la motivación de la decisión adoptada, mientras que el artículo 95 del mismo cuerpo normativo determina que la sentencia escrita deberá incluir la relación de los hechos probados relevantes para la resolución y la motivación como requisito indispensable de validez (COGEP, 2015, arts. 90 y 95). Espinosa (2010) sostiene que la motivación de las decisiones judiciales es un principio importante y una protección del debido proceso, que requiere que los magistrados fundamenten sus

determinaciones de manera sólida y lógica, a fin de prevenir cualquier tipo de arbitrariedad. Por lo tanto, el COGEP determina que la motivación es un elemento de toda sentencia judicial, si falta, no solo conlleva la anulación del fallo, sino que puede ser motivo para interponer un recurso de casación o de apelación.

El artículo 92 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) establece que las sentencias deben ser precisas, coherentes y claras con los aspectos del proceso, mientras que el artículo 93 del mismo cuerpo normativo determina que la resolución escrita motivada deberá ser notificada en el término de hasta diez días (COGEP, 2015, arts. 92 y 93). En este sentido, Espinosa Cueva (2010) precisa que la motivación no constituye un simple formalismo, sino un elemento intelectual con contenido crítico, valorativo y lógico que involucra el razonamiento de derecho y de hecho en donde el juzgador apoya su decisión. En el contexto del proceso civil ecuatoriano, estas disposiciones adquieren especial relevancia frente a la valoración de la prueba digital, toda vez que el juzgador está obligado a motivar de manera clara, precisa y congruente los criterios técnicos y jurídicos que sustentan su decisión respecto de dicho medio probatorio, garantizando así la seguridad jurídica de las partes procesales.

Código Orgánico de la Función Judicial

El Código Orgánico de la Función Judicial constituye el cuerpo normativo que regula la organización, funcionamiento y atribuciones de los órganos jurisdiccionales del Ecuador, estableciendo entre sus disposiciones fundamentales la obligación expresa de los jueces de motivar debidamente sus resoluciones como parte de sus facultades jurisdiccionales esenciales. En este sentido, el artículo 130 numeral 4 del COFJ dispone que es facultad esencial de las juezas y jueces motivar debidamente sus resoluciones, especificando que no habrá motivación si las normas o principios legales en los que se basa la resolución no son mencionados y si no se justifica por qué es pertinente aplicarlos a los hechos precedentes. Además, estableciendo que las resoluciones o sentencias que no estén correctamente motivadas serán nulas (COFJ, 2009, art. 130.4). Entendiéndose con ello que la motivación judicial constituye una facultad

esencial e irrenunciable del juzgador, cuyo incumplimiento acarrea consecuencias jurídicas de suma gravedad dentro del proceso civil ecuatoriano.

Complementando lo anterior, el artículo 23 del COFJ por medio de los jueces y las juezas, la Función Judicial tiene como obligación principal asegurar que se protejan efectivamente los derechos establecidos en la Constitución. Esto implica que deben ser siempre resolver las pretensiones y excepciones planteadas por los litigantes únicamente con base en la Constitución, las herramientas internacionales de derechos humanos y los méritos del proceso (COFJ, 2009, art. 23). En este sentido, Ricaurte (2023) señala que motivar es justificar y exponer las razones que muestran que una decisión es correcta o aceptable, precisando además que los órganos del poder público tienen el deber de desarrollar la mejor argumentación posible en apoyo de sus decisiones (p. 33). Entendiéndose con ello que la motivación judicial no constituye una facultad discrecional del juzgador, sino una obligación sustancial que garantiza la legitimidad y racionalidad de las decisiones adoptadas dentro del proceso civil ecuatoriano.

Por otra parte, el artículo 25 del COFJ establece la uniforme, constante y fiel aplicación de la Constitución y las leyes debe ser realizado por los jueces, lo cual implica que la motivación de las resoluciones judiciales debe observarse de manera rigurosa y uniforme en todos los procesos judiciales sin excepción (COFJ, 2009, art. 25). Al respecto, Ortiz Suárez (2020) sostiene que la motivación permite que los ciudadanos controlen las bases de la administración de justicia, señalando además que, si la motivación es escasa, contradictoria o defectuosa, se perjudica la seguridad jurídica como garantía básica de un estado de derecho (pp. 3-8). De este modo, la seguridad jurídica como principio rector del ordenamiento jurídico ecuatoriano exige que las decisiones judiciales sean motivadas de manera consistente y predecible, garantizando así que las partes procesales puedan conocer con certeza los fundamentos normativos y fácticos que sustentan la resolución adoptada por el juzgador en el proceso civil.

Finalmente, el artículo 29 del COFJ establece que, al interpretar la ley procesal, el juez debe considerar que el propósito de los procedimientos es garantizar la efectividad de los derechos que la Constitución reconoce. Para ello, tiene que aclarar las dudas para asegurar que se den

las garantías constitucionales del proceso y se respete el derecho a defenderse de cada parte a través de los principios generales del derecho procesal (COFJ, 2009, art. 29). Al respecto, Cevallos y Litardo (2018) señalan que la aplicación correcta y oportuna de los principios procesales constituye una garantía para las partes procesales, lo que permitirá que el Estado garantista cumpla con sus ciudadanos respetando las garantías del debido proceso y haciendo efectivo el principio de seguridad jurídica como garantía básica del Estado de derecho (p. 253). En el contexto del proceso civil ecuatoriano, estas disposiciones adquieren especial trascendencia frente a la valoración de la prueba digital, toda vez que el juzgador está obligado a aplicar e interpretar las normas procesales con pleno respeto a las garantías constitucionales, motivando de manera suficiente, razonada y congruente los criterios jurídicos y técnicos que fundamentan su decisión respecto de dicho medio probatorio.

2.5 Relación entre variables de estudio

2.5.1 Relación entre la valoración de la prueba digital y la motivación judicial

La evaluación de la prueba digita y la motivación judicial están relacionados ya que la prueba proporciona información relevante para certificar hechos, pero solo se vuelve sólida cuando el juez justifica de forma lógica porque dicho elemento es auténtico, pertinente y suficientes; mientras que la motivación judicial aumenta cuando no se reduce a citar regulaciones, sino que incluye el análisis técnico-jurídico del medio digital evaluado.

Esta vinculación adquiere una especial relevancia en el ámbito civil ecuatoriano, dado que los medios probatorios de naturaleza digital inciden de manera concreta sobre las situaciones jurídicas de diversas índoles, como son de carácter contractual, patrimonial, familiar o comercial. Cuando el juzgador incorpora una prueba digital sin revisar las condiciones en la que fue conservada o la relación con los hechos controvertidos, la resolución puede comprometen las garantías del debido proceso. Además si la prueba se integra sin justificación alguna, corre el riesgo de que exista la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por parte de quien la presento.

Es por ello por lo que, la variable que valora la prueba digital funciona como una condición previa para el análisis de hechos, mientras que las variables que mide la motivación judicial sirven como garantía de supervisión constitucional y procesal. Es posible afirmar que una sentencia civil será más robusta si el juez fundamenta la autenticidad, integridad, licitud, pertinencia, utilidad y fuerza convectiva de los medios digitales utilizados durante el proceso.

2.6 Objetivos

2.6.1 Objetivo General

En la presente investigación se aplica como objetivo general a ejecutar un análisis de la valoración de la prueba digital en la motivación dentro del proceso civil ecuatoriano, desarrollando una investigación doctrinaria donde se abarca fundamentos teóricos de la prueba digital, así como sus características y su relación con la motivación de las decisiones judiciales. Además se realiza un análisis normativo nacional e internacional que permite visualizar la regulación de la prueba digital dentro de los procesos civiles ecuatorianos, determinando de que manera el operador de justicia valora este tipo de pruebas al momento de tomar las decisiones dentro del proceso.

2.6.2 Objetivos Específicos

A fin de lograr alcanzar el desarrollo de la investigación y el objetivo general, se formula como primer objetivo específico examinar la norma jurídica sobre la prueba digital dentro del proceso civil, para lo cual se procede a revisar bibliográfica/documental en el marco teórico, efectuando además un análisis de la normativa nacional e internacional, donde se examina el derecho comparado entre las repúblicas de España, Colombia, Argentina, Estados Unidos, y la Unión Europea, identificando la existencia de vacíos normativos en la legislación ecuatoriana.

En atención con el segundo objetivo específico, va dirigido a identificar los criterios jurídicos de la valoración de la prueba digital en las decisiones judiciales, para lo cual se aplica la técnica de entrevista de diez jueces del Complejo Judicial de Ambato, mediante una guía de entrevista, obteniendo como resultado la identificación de los criterios aplicado en la práctica, así como las limitaciones y las herramientas a las que recurren los operadores de justicia al momento de fundamental sus decisiones respecto a la prueba digital.

En atención al tercer objetivo específico, centrado a establecer criterios jurídicos que permitan evaluar de forma objetiva la motivación de la prueba digital dentro del proceso civil ecuatoriano, este se alcanzó mediante el análisis y discusión de la revisión normativa, la doctrina, el derecho comparado y las entrevistas realizadas, permitiendo establecer criterios jurídicos concretos que garanticen que la motivación judicial sea suficiente, congruente y técnicamente fundamentada, en concordancia con el art.76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la República del Ecuador.

CAPITULO II.- METODOLOGÍA

3.1 Materiales

3.1.1 Recursos Institucionales

La realización del presente trabajo se acude a las instalaciones de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Ambato, asimismo se empleó el uso de las bibliotecas físicas y digitales de la carrea de Derecho de diferentes universidades.

3.1.2 Recursos Humanos

En la ejecución de la investigación se contó con el apoyo de la docente tutora e investigadora, así como expertos en el área, como son los operadores de justicia del Complejo Judicial de Ambato, quienes con su experiencia aportan elementos de análisis y ayudan a que el presente estudio tenga una veracidad jurídica.

3.1.3 Recursos Materiales

Los recursos materiales que se cumplen para la elaboración de la presente investigación fueron libros relacionados con la prueba digital, valoración de la prueba digital y la motivación judicial, de igual manera la utilización de suministros de oficina para la impresión de la tesis una vez sea finalizada.

3.1.4 Recursos Tecnológicos

Los recursos tecnológicos implementados para llevar a cabo el presente estudio fue el servicio de internet, por el cual se obtiene acceso a libros, doctrina, jurisprudencia y normativa relacionada con la valoración de la prueba digital y su motivación, donde la búsqueda considero bases como Google Académico, SciELO, Dialnet, RedALyC y ScienceDirect. Cabe recalcar

que también se hace uso de una laptop para la redacción y el archivo del trabajo de investigación.

3.1.5 Recursos Financieros

Tabla 2

Especificación de materiales empleados

Detalle	Valor
Internet	$50 USD
Hojas de papel	$15 USD
Útiles de oficina	$20 USD
Impresiones	$25 USD
Total	**$110 USD**

Nota: Tabla de materiales empleados

3.2 Método

Previo a que se ha especificado los materiales que han sido implementados, es importante implementar la metodología bajo la cual se sustenta el trabajo de investigación, como es el método analítico- sintético el mismo que permitió analizar de forma independiente cada variable, teniendo como variable independiente la valoración de la prueba digital y como variable dependiente la motivación judicial, donde se identificó las características, vacíos normativos y la incidencia de la prueba digital en las resoluciones judiciales.

3.3 Nivel o Tipo de Investigación

Descriptiva

Con la ayuda de la investigación descriptiva se logra identificar los vacíos normativos existentes en la legislación vigente y las limitaciones que enfrentan los operadores de justicia al momento de valorar la prueba digital dentro de los procesos no penales, tomando en consideración la motivación judicial, esto se obtiene a través de la revisión bibliográfica y normativa nacional e internacional, acompañado de la aplicación de entrevistas a diez jueces del Complejo Judicial de Ambato, quienes brindan información transcendental sobre la realidad estudiada.

3.4 Método aplicado

Enfoque Cualitativo

La investigación cualitativa tiene como objetivo conocer la realidad que se estudia a través de la obtención de información, criterios, perspectivas y experiencias de la población que esta siendo estudiada, para la presente investigación se implementa el criterio de diez jueces conocedores de la materia, quienes a través de su experiencia aportan información sobre las implicaciones jurídicas que genera la valoración de la prueba digital dentro del proceso civil ecuatoriano y como esta incide en la motivación judicial. Teniendo en consideración que el aporte de los jueces brinda soporte a la investigación bibliográfica y normativa, alcanzando un nivel mayor de certeza y veracidad jurídica al presente estudio.

3.5 Técnica

Entrevista

En consideración con la presente investigación, se desarrolló en base a la técnica de entrevista, dado que se requiere recolectar información directa de los operadores de justicia que intervienen en los procesos no penales y que tienen relación directa con el problema jurídico estudiado. La información recopilada mediante esta técnica permite obtener datos relevantes sobre la valoración de la prueba digital y la motivación judicial desde una perspectiva práctica, enmarcada en las experiencias adquiridas por los operadores de justicia en los diferentes casos que han conocido en su experticia laboral.

3.6 Instrumentos

Guía de entrevista

La guía de entrevista es un instrumento que enfoca las preguntas para que los jueces del Complejo Judicial de Ambato comprendan las interrogantes planteadas y aporten información necesaria para conocer los diferentes criterios jurídicos que aplican en la valoración de la

prueba digital y su efecto en la motivación judicial dentro de los procesos no penales ecuatorianos.

Atlas. Ti

Otro de los instrumentos empleados fue ATLAS.TI., herramienta de análisis cualitativo de datos que permite sistematizar, categorizar y organizar la información obtenida mediante las entrevistas realizadas a los jueces del Complejo Judicial de Ambato, facilitando la interpretación de los criterios jurídicos relacionados con la valoración de la prueba digital y su incidencia en la motivación judicial dentro del proceso civil ecuatoriano.

3.7 Población y Muestra

Población

La población de la presente investigación se encuentra constituida por operadores de justicia del Complejo Judicial de Ambato, quienes por su experiencia y conocimiento ayudan a constituir la fuente primaria de la información, es por ello que en virtud de sus funciones jurisdiccionales, poseen un conocimiento directo y especializado sobre la valoración de la prueba digital y la motivación jurisdiccional, lo que les convierte en los actores más aptos para proporcionar información relevante y confiable en la presente investigación.

Muestra

La muestra se encuentra conformada por los diez jueces del Complejo Judicial de Ambato, los cuales son 6 jueces de la Unidad Judicial Civil y 4 jueces de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñes y Adolescencia, en virtud de que los sujetos seleccionados reúnen las condiciones técnico-jurídicas necesarias para el análisis de las variables de estudio, al contar con experiencia directa en la valoración de la prueba digital y la motivación de resoluciones judiciales dentro de los procesos civiles ecuatorianos.

CAPITULO III.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

ANÁLISIS

4.1 Análisis Interpretativo

A través del análisis y discusión de la información obtenida por medio de las entrevistas a los operadores de justicia, se logra identificar criterios significativos, los cuales se contrastan con la realidad jurídica de la prueba digital, teniendo en cuenta que este tipo de pueda constituye uno de los medios probatorios más relevantes dentro del sistema judicial ecuatoriano, respondiendo a un avance constante de la tecnología de la información y a la transformación progresiva de las relaciones jurídicas hacia los entornos digitales.

A.- La prueba digital en los procesos no penales

Las entrevistas realizadas a los operadores de justicia del Complejo Judicial de Ambato revelan criterios diversos respecto a la definición y naturaleza jurídica de la prueba digital. El Dr. Jorge Arcos la vincula de manera directa al debido proceso y el derecho a la defensa, enfatizando la constitucionalidad dentro de los procesos no penales. Por otra parte, el Dr. Sergio Frias y el Dr. Marcelo López la definen como una información obtenida de soportes tecnológicos, teniendo una correlación más técnica del medio probatorio. El Dr. Luis Fonseca la indica como un soporte informático con información digital, mientras que la Dra. Cecilia Mayacela la identifica como un registro de datos que representan los hechos jurídicos que están siendo tratados en un proceso.

Tabla 3

Definición de la prueba digital

Jorge Arcos	Sergio Frias	Luis Fonseca	Oscar Villacres	Cecilia Mayacela	Marcelo López	Amado Bravo	Edwin Ortega	Luis Poveda	Cristhian Paredes
Relacionada con debido proceso y defensa.	Información contenida en soportes tecnológicos.	Soporte informático con información electrónica.	Herramienta fundamental para optimizar procesos.	Registro de datos que representan hechos jurídicos.	Información electrónica e inmaterial contenida en soportes informáticos.	Medio reconocido por el COGEP.	Prueba legítima sometida a contradicción.	Reproducción digital con valor del original.	Medio telemático o digital.

Nota: Tabla del análisis de entrevistas respecto a la definición de la prueba digital.

Teniendo correlación con lo mencionado por los operadores de justicia, que sostienen que este tipo de prueba tiene equivalencia jurídica con la prueba documental. Cabe recalcar, que el otro porcentaje de entrevistados indican, que la prueba digital se constituye como un medio probatorio autónomo, siendo muy diferente a la prueba documental, debido a ciertas particularidades que presentan estas pruebas, como es su almacenamiento, reproducción, preservación y verificación; indicando con ello que existe una discusión jurídica que todavía no se encuentra consolidada en el ordenamiento procesal ecuatoriano.

Dichas definiciones se complementan entre sí y se basan en un sustento normativo en el art. 202 del COGEP, donde se otorga a los documentos electrónicos el mismo valor jurídico que la prueba documental, y en los artículos 2 y 14 de la LCEFEMD, que reconocen los mensajes de datos como equivalentes funcionales de los documentos escritos, basándose en los estándares de admisibilidad y valoración.

Tabla 4

Naturaleza jurídica y características de la prueba digital

Jorge Arcos	Sergio Frias	Luis Fonseca	Oscar Villacres	Cecilia Mayacela	Marcelo López	Amado Bravo	Edwin Ortega	Luis Poveda	Cristhian Paredes
Supera a la prueba documental tradicional.	Similar a documental con formalidades	Puede incorporarse como documental.	Tiene el mismo valor de la documental.	El COGEP la clasifica como documental.	Integridad y verificabilidad.	Autenticidad y origen legal.	Bases de datos y firma electrónica.	Certificación válida.	Formato digital reproducible.

Originalidad, no manipulación y cadena de custodia.	Licitud, legalidad y respaldo tecnológico.	Autenticidad e integridad.	Digitalización y adecuada reproducción.	Autenticidad, integridad, pertinencia y conducencia.	Equivalencia con prueba documental.	Son medios probatorios diferentes.	Adquiere valor documental al	Igual valor jurídico que la documental.	Distinta a la documental salvo materialización legal.

Nota: Tabla de análisis de las entrevistas sobre la naturaleza jurídica y sus características de la prueba digital.

Respecto a su naturaleza jurídica, existe una discrepancia entre los jueces entrevistados; donde el Dr. Oscar Villacres y la Dra. Cecilia Mayacela, sostienen que la prueba digital es equivalente a la prueba documental según el art. 202 del COGEP, mientras que el Dr. Amado Bravo y el Dr. Cristhian Paredes, la reconocen como un medio probatorio autónomo con características propias que le diferencian de la prueba documental. Cabe recalcar que discrepancia jurídica aún no se encuentra dictaminada en ningún cuerpo normativo ecuatoriano.

Dentro del análisis los jueces identifican como características esenciales de la prueba digital la autenticidad, integridad y ausencia de manipulación. El Dr. Jorge Arcos destaca la originalidad de la esta prueba y el manejo de una cadena de custodia; El Dr. Sergio Frías menciona la licitud y el respaldo tecnológico; la Dra. Cecilia Mayacela indica la autenticidad, integridad, pertinencia y conducencia; mientras que el Doctor Luis Fonseca se centra en la autenticidad e integridad.

Identificando que la prueba digital debe cumplir ciertos estándares técnicos como es la preservación y verificación de este tipo de prueba. Además que no se puede presumir por la simple existencia de un archivo, sino que el mismo debe acreditarse mediante una verificación técnica que demuestre que la información no ha sido alterada ni modificada.

Respecto a los mecanismos de verificación se da la existencia de herramientas como los metadatos, certificaciones electrónicas, mecanismos de validación informativa y registros de actividades digitales. A si como la intervención de peritos especializados donde los mismos podrán determinar la legitimidad de audios, videos, mensajes, documentos escaneados, firmas electrónicas y otras evidencias digitales que puedan ser incorporados dentro del proceso.

Del análisis previo los jueces fundamentan la valoración de la prueba digital en el artículo 202 del COGEP donde se evidencia la fuerza probatoria equivalente a la prueba documental, y en los artículos 2,14 y 52 de la LCEFEMD reconocen el principio de equivalencia funcional. Cabe mencionar, que todos coinciden en que esta normativa es insuficiente, dado que no establece criterios específicos sobre la autenticidad, integridad ni cadena de custodia digital, generando con ello vacíos que comprometen la objetividad de la valoración probatoria.

B) Criterios jurídicos en la valoración de la prueba digital

Los jueces entrevistados mencionan que la sana critica es aquel mecanismo central de la valoración de la prueba digital en el proceso civil, sustentándose en el art. 160, 161 y 164 del COGEP. Donde su aplicación exige un análisis conjunto de todos los elementos probatorio, bajo un criterio de pertinencia, utilidad, conducencia, fiabilidad y coherencia lógica. El Dr. Sergio Frias señala que existen directrices aplicables, pero no hay jurisprudencia obligatoria; el Dr. Luis Fonseca se apoya en los parámetros de la Corte Constitucional y el COGEP; la Dra. Cecilia Mayacela aplica el control de logicidad y criterios de la Corte Provincial; mientras que el Dr. Jorge Arcos recurre a la doctrina compara y la convencionalidad.

Esta figura enfrenta desafíos singulares frente a la prueba digital, debido a que el juez, es quien debe evaluar la naturaleza jurídica, apoyándose únicamente en su razonamiento jurídico y su experiencia, herramientas que pueden resultar insuficientes ante la complejidad técnica de ciertos medios digitales. Si bien la sana crítica representa uno de los mecanismos de valoración legalmente reconocido, su aplicación frente a la prueba digital tiene varias limitaciones. Entendiéndose que los estándares de la normativa vigente y la capacidad técnica, representa uno de los vacíos más significativos.

Esta ausencia obliga a que los jueces recurran a doctrina, analogías normativas y principios generales del derecho, lo que compromete dos pilares fundamentales, donde la predictibilidad de las decisiones judiciales y la seguridad jurídica de las partes. Como resultado se indica que

la motivación suficiente queda con un vació jurisprudencial dado a la ausencia de criterios en esta materia.

Tabla 5

El rol del peritaje y las dificultades de la valoración de la prueba digital, así como su autenticidad

	Jorge Arcos	Sergio Frias	Luis Fonseca	Oscar Villacres	Cecilia Mayacela	Marcelo López	Amado Bravo	Edwin Ortega	Luis Poveda	Cristhian Paredes
Rol del peritaje y valoración judicial	El juez requiere apoyo de expertos técnicos y debe verificar origen, licitud y cadena de custodia.	El informe pericial no es suficiente; el juez aplica sana crítica, pertinencia y utilidad.	Herramienta auxiliar la misma que debe ser comparada en conjunto con otras pruebas mediante la sana crítica.	La valoración y la validez de la prueba están relacionados con los hechos, aunque no ha existo casos periciales.	Herramienta de auxilio, donde el juez debe aplicar la sana crítica y la logicidad.	Evaluación técnica y jurídica conjunta.	La realización del peritaje es esencial.	Análisis jurídico integral.	El peritaje debe ser revisado previamente y este muchas veces es sujeto a contradicción.	Debate pericial y sana crítica.
Dificultades técnicas y normativas	Falta de capacitación y debilidad pericial	Falta de ley modema digital.	Complejidad de verificación.	Desconocimiento técnico de las partes.	Falta de peritos especializados.	Debilidad en cadena de custodia.	No existen mayores dificultades con peritos.	Problemas de autenticidad y contradicción.	Desconocimiento sobre incorporación procesal.	No observa mayores inconvenientes prácticos.
Autenticidad	Metadatos y origen de la prueba.	Idoneidad y formalidad de obtención.	Aplicación de sana crítica.	Verificación de ausencia de alteración.	Verificación de autenticidad y reproducción.	Aspectos técnicos y jurídicos.	Verificación conforme a ley.	Bases de datos fidedignas.	Certificación y evacuación correcta.	Peritaje y ausencia de adulteración.

Nota: Tabla sobre el peritaje, valoración y autenticidad de la prueba digital.

Respecto al peritaje, los jueces indican diferentes posiciones. El Dr., Jorge Arcos señala que el juez requiere apoyo de expertos técnicos, pero aun así debe verificar el origen, la licitud y la cadena de custodia; el Doctor Sergio Frias indica que el informe pericial no es suficiente por si solo y debe complementarse con la sana critica; El Dr., Luis Fonseca la reconoce como una herramienta auxiliar; la Dra. Cecilia Mayacela lo define como un instrumento auxiliar, pero el

juez es quien da su sana crítica y la logicidad; el Dr. Amado Bravo considera este peritaje como esencial; mientras que el Dr. Luis Poveda enfatiza que debe ser revisado previamente y el mismo está sujeto a contradicción.

La presente investigación evidencia que el informe pericial es un elemento auxiliar, no vinculante, dentro del proceso judicial destacando que el perito aporta un conocimiento técnico especializado en el análisis de la autenticidad e integridad, se debe tener en claro que la valoración final corresponde exclusivamente al juez, quien aplica las reglas de la sana critica conforme se encuentra en el art. 164 del COGEP. Sin embargo la limitada disponibilidad de peritos acreditados en el sistema judicial ecuatoriano dificulta su acceso efectivo.

Los entrevistados identifican múltiples problemáticas que afectan a la valoración de la prueba digital. El Dr. Jorge Arcos destaca la falta de capacitación especializada a los operadores de justicia y la debilidad pericial; El Dr. Luis Fonseca menciona la complejidad de verificación; el Dr. Oscar Villacres destaca el desconocimiento técnico sobre la incorporación y evacuación de pruebas digitales; La Dra. Cecilia Mayacela indica la escasez de peritos acreditados y especializados en esta materia; el Dr. Edwin Ortega advierte sobre problemas sobre la autenticidad, conservación y manipulación; y el Dr. Luis Poveda indica el desconocimiento sobre la incorporación adecuada dentro del proceso.

Tabla 6

Riesgos de manipulación en la prueba digital

Jorge Arcos	Sergio Frias	Luis Fonseca	Oscar Villacres	Cecilia Mayacela	Marcelo López	Amado Bravo	Edwin Ortega	Luis Poveda	Cristhian Paredes
IA y hackers pueden alterar información.	Riesgo de alteración tecnológica.	Riesgo de falsificación.	Existencia de alteración digital.	Facilidad de alteración de pruebas.	Riesgo elevado de alteración.	Riesgos verificables mediante peritaje.	Vulnerabilidad tecnológica.	No ha tenido casos concretos.	Manipulación mediante nuevas tecnologías.

Nota: Tabla del análisis sobre la manipulación de la prueba digital.

A estas limitaciones, los jueces también alertan sobre riesgos de vulnerabilidad tecnológica, destacando que el avance de la inteligencia artificial y las nuevas herramientas informáticas incrementan considerablemente la posibilidad de la alteración de archivos, falsificación de conversaciones, modificación de audios o videos, los mimos que muchas veces son IA de difícil detección, representando uno de los desafíos urgentes para la administración de justicia, obligando a que existan mecanismos de fortalecimiento de verificación y control probatorio. Estos riesgos emergentes exigen una respuesta normativa urgente que incorpore mecanismos de verificación más adecuados, como firmas electrónicas, sellos temporales y cadena de custodia digital.

C) La motivación de la prueba digital en los procesos no penales

Respecto a la motivación judicial el Dr. Jorge Arcos recurre a la doctrina comparada y la convencionalidad; el Dr. Cristhian Paredes recurre a la doctrina y sentencias nacionales; el Dr. Luis Fonseca aplica los parámetros de la Corte Constitucional y el COGEP; la Dra. Cecilia Mayacela aplica el control de logicidad; el Dr. Amado Bravo se apoya en el COGEP y la LCEFEMD. Llegando todos a una conclusión, que es la insuficiente producción de jurisprudencia especifica de la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional, lo que compromete la seguridad jurídica la misma que se encuentra garantizada en el art. 82 de la CRE.

Tabla 7

La motivación judicial

Jorge Arcos	Sergio Frias	Luis Fonseca	Oscar Villacres	Cecilia Mayacela	Marcelo López	Amado Bravo	Edwin Ortega	Luis Poveda	Cristhian Paredes
Doctrina comparada y convencionalidad	Directrices sin jurisprudencia obligatoria.	Parámetros Corte Constitucional y COGEP.	Ley de Registro y Ley Notarial.	Control de logicidad y criterios de Corte Provincial.	Constitución y leyes digitales.	COGEP y Ley de Comercio Electrónico.	Sana crítica general.	Análisis normativo.	Doctrina y sentencias nacionales.

Nota: Análisis de las entrevistas sobre la motivación judicial.

Cabe recalcar que en la Sentencia No. 1158-17-EP/21 de la Corte Constitucional establece que la motivación debe cumplir tres estándares fundamentales, que son la suficiente, congruencia y razonabilidad. Reafirmando que la prueba digital no constituye un fenómeno ajeno al ordenamiento jurídico vigente, sino que este debe tratarse con los principios y las garantías que rigen en el proceso civil ecuatoriano.

Además se determina que para la motivación judicial respecto a la prueba digital se debe tener una estructuración en tres niveles. El primero corresponde a la trazabilidad, autenticidad, integridad, metadatos y códigos de hash de los elementos digitales, así como su contraste con el conjunto del material probatorio. El segundo nivel es jurídico, referido a la verificación de la licitud, pertinencia y conducencia, teniendo concordancia con el art. 76 numeral 4 de la CRE y el 160 del COGEP. Finalmente, el nivel argumentativo donde se indica que los elementos técnicos y jurídicos sean vinculados de una manera lógica y coherente con la decisión que está siendo tomada, garantizando una motivación suficiente.

Tabla 8

Los desafíos del sistema judicial

Jorge Arcos	Sergio Frias	Luis Fonseca	Oscar Villacres	Cecilia Mayacela	Marcelo López	Amado Bravo	Edwin Ortega	Luis Poveda	Cristhian Paredes
Desarrollo normativo y armonización constitucional.	Modernización legal y capacitación.	Herramientas tecnológicas adecuadas.	Capacitación y fortalecimiento normativo.	Unificación de criterios doctrinarios y judiciales	Capacitación tecnológica.	Mayor uso de prueba digital.	Fortalecer sana crítica judicial.	Capacitación técnica de operadores.	Transformación digital total del sistema judicial.

Nota: Análisis sobre las entrevistas respecto a los desafíos del sistema judicial.

Ante la ausencia de estos tres niveles se da la vulneración del debido proceso y la tutela judicial efectiva, comprometiendo la correcta motivación. Además, se indica que el sistema judicial ecuatoriano enfrenta importantes desafíos institucionales frente a la transformación digital, donde los jueces coinciden en la necesidad de actuar en cuatro factores fundamentales: como

es fortalecer la capacidad técnica de los operadores judiciales, mejorar los mecanismos tecnológicos de verificación, promover la especialización pericial y consolidar criterios jurisprudenciales uniformes de la prueba digital.

Destacando que la unificación de criterios doctrinarios y jurisprudenciales es una demanda central, donde la misma se considera indispensable para mejorar al sistema de herramientas interpretativas claras y objetivas donde estas permitan enfrentar con eficacia la complejidad del tratamiento de la prueba digital.

En consecuencia, puede concluirse que la prueba digital representa un medio probatorio complejo, donde el mismo exige la integración permanente de conocimiento jurídicos y técnicos, cuya adecuada valoración no depende únicamente de la existencia de normas legales, sino también de la capacitación a los operadores de justicia, así como de los abogados del libre ejercicio, para adaptarse a los nuevos desafíos tecnológicos, garantizando la autenticidad, seguridad jurídica, debido proceso y la protección efectiva de los derechos fundamentales dentro del proceso judicial.

4.2 Discusión

En base a una opinión critica personal, una vez realizada la revisión bibliográfica y documental, así como el análisis de las entrevistas, se ha podido establecer que en el Ecuador cuenta con un marco normativo donde reconoce la prueba digital, pero de manera dispersa y sin consolidar un protocolo especifico donde se regule de forma integral el tratamiento procesal. Donde la Constitución, el COGEP y la LCEFEMD configuran las normativas aplicables a la prueba digital dentro de los procesos civiles ecuatorianos.

Es por ello por lo que en el artículo 76 numeral 4 de la CRE indica que las pruebas obtenidas con violación de la Constitución o que carezcan de eficacia probatoria, lo que impone al juzgador la obligación de verificar la licitud de su obtención antes de admitirlas previamente. Sin embargo, en el artículo 160 y 161 del COGEP exigen que toda prueba reúna los requisitos

de pertinencia, utilidad y conducencia, criterios que adquieren una complejidad técnica adicional en el ámbito de la prueba digital.

De la misma forma en el artículo 202 del COGEP donde otorga una fuerza probatoria equivalente a la prueba documental, la prueba digital o escaneados, lo que representa un avance normativo relevante. Asimismo, los artículos 2,14 y 52 de la Ley de Comercio Electrónico, donde se determina el principio de equivalencia funcional, reconociendo que mensajes de datos y firmas electrónicas tienen un valor jurídico similar que los documentos escritos, para que los mismos puedan ser admitidos dentro del proceso.

Sin embargo, del análisis realizado de las entrevistas, se indica que existe vacíos normativos, dado que no establecen criterios específicos sobre la autenticidad, integridad, cadena de custodia de la prueba digital ni protocolo de verificación para que el juzgador pueda aplicar de manera objetiva. Como los señala Oleas, donde indica que la regulación jurídica resulta insuficiente dado la propia naturaleza de la prueba digital, mientras que Reyes, concluye que es imprescindible una regulación específica donde se garantice la igualdad procesal y la eficiencia judicial.

En el derecho comprado se puedo evidenciar avaneces significativos en la regulación de la prueba digital. España, Colombia, Argentina y Estados Unidos cuentan con normativas especificas donde se establecen criterios de fiabilidad, integridad y autenticidad para los medios digitales, mientas que en la Union Europea en su Reglamento eIDAS, reconoce efectos probatorios directos a las firmas electrónicas, ofreciendo con ello un modelo de trazabilidad que Ecuador podría incorporar a su práctica judicial.

Determinando con ello que el problema en Ecuador no es exclusivamente normativo, sino de aplicación, entendiendo que se exige una regulación en la normativa, haciendo que la insuficiencia técnica haga que los operadores de justicia carezcan de criterios claros y uniformes para la valoración de la prueba digital, generando con ello inseguridad jurídica dentro de los procesos civiles ecuatorianos.

A partir de entrevistas con diez jueces del complejo judicial de Ambato, se ha podido establecer que la crítica razonada es el principal criterio y consenso en la valoración de la prueba digital en los procesos civiles ecuatorianos, la cual tiene un contexto en los artículos 160, 161 y 164 del COGEP. Si los jueces coinciden en que la condena debe establecerse analizando conjuntamente todos los elementos probatorios, teniendo en cuenta los criterios de relevancia, aplicabilidad, disponibilidad, confiabilidad y coherencia lógica, donde con Montenegro indica que la prueba digital debe analizarse en su conjunto, sin separar los medios de prueba de otros elementos procesales.

Sin embargo, su aplicación presenta varios desafíos, teniendo en cuenta que los jueces deben evaluar elementos de naturaleza técnica a partir de su razonamiento jurídico y de sus experiencias laborales, herramientas que pueden resultar insuficientes frente a la complejidad de los criterios de medios digitales, por lo cual el Doctor Arcos, el Doctor Bravo y la Doctora Mayacela coindicen que el peritaje es una herramienta de auxilio técnico para los juzgadores. Siendo esta postura coherente con Devis Echandía, donde sostiene que la preparación del juzgador no muchas debe abarcar con todos los ámbitos de conocimiento científico y técnico, por lo que la participación de un perito ayuda a que exista una mayor objetividad a la valoración de la prueba digital.

Otro de los elementos críticos es la falta de jurisprudencia por parte de la Corte Nacional de Justicia, así como de la Corte Constitucional sobre la prueba digital, lo que obliga a los jueces a utilizar únicamente criterios de doctrina comparada, así como sentencias nacionales, comprometiendo la predictibilidad de las decisiones y la seguridad jurídica la misma que esta garantizada en el artículo 82 de la CRE.

Siendo con ello que desde el derecho comparado esta brecha es visible, dado que en Estados Unidos la autenticidad digital es un paso procesal estandarizado, mientras que en Colombia los criterios de fiabilidad están definidos por la ley y en España el debate sobre la prueba tecnológica se encuentra regulado procesalmente, dando como evidencia que la sana critica,

sin que exista técnicas, ni jurisprudencias, resulta muy difícil que exista un criterio de valoración especifica.

Desprendiéndose del análisis integral de la normativa, la doctrina, el derecho comparado y las entrevistas realizados a los juzgadores, se establece que la motivación judicial en materia de la prueba digital requiere criterios jurídicos que complementen a la sana critica, los mismos que permitan al juzgador fundamentar sus decisiones de manera suficiente, especifica y razonada, como lo señalo Taruffo donde indica que la motivación es aquel discurso que justifica de manera racional la prueba digital, donde no se puede agotar en expresiones generales como: se acepta la prueba o se considera válida.

Teniendo como consecuencia, que la motivación siempre debe responder a tres peguntas especificas: ¿por qué el contenido digital es autentico?, ¿qué factores sustentan su integridad?, y por último ¿cómo se vincula esta prueba con los hechos alegados?, enlazando que la motivación debe tener un nivel jurídico, técnico y argumentativo, donde se exprese como estos elementos sostienen la decisión que se esté adaptando.

Es por ello que los jueces entrevistados identifican criterios que ya se aplican, donde el Doctor Fonseca subraya que el peritaje debe contrastarse con las demás pruebas en conjunto; el Doctor Ortega destaca la necesidad de un análisis integral técnico; el Doctor Poveda enfatiza sobre la contradicción y la revisión de la prueba en conjunto; y por último la Doctora Mayacela destaca que el control de logicidad sobre el razonamiento pericial, elementos que pueden ayudar a que exista un estándar motivacional mucho más exigente.

Sumando estos desafíos al riesgo sobre la manipulación y falsificación de la prueba digital por medio de la inteligencia artificial, donde el Doctor Arcos advierte que esta alteración de información puede ser de difícil detección, mientras que el Doctor Ortega alerta la existencia de la vulneración tecnológica contemporánea, lo que refuerza la necesidad de una fundamentación mucho más técnica donde se descarte la posibilidad de alteración a la prueba digital.

Por último desde el derecho comparado, la cadena de custodia de la prueba digital es obligatoria tanto en Colombia y Estados Unidos, pero en el Reglamento eIDAS de la Union Europea reconoce como efectos probatorios a los sellos temporales, y en España y Argentina se exige que exista un peritaje técnico como requisito principal, prácticas que respaldan que Ecuador debe avanzar hacia la incorporación de un peritaje especializado para la evaluación de la prueba digital, de la misma forma la incorporación de la cadena de custodia digital como un principio fundamental de la admisibilidad, jurisprudencia concordante de la Corte Nacional de Justicia, así como la Corte Constitucional y capacitaciones técnicas a los operadores de justicia en materia de la prueba digital dentro de los procesos civiles ecuatorianos.

CAPITULO IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Se determinó que la normativa ecuatoriana reconoce a la prueba digital de manera dispersa entre la Constitución, el Código Orgánico General de Procesos y la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, teniendo en claro que no existe un protocolo especifico que regule la autenticidad, integridad, cadena de custodia digital y los procedimientos técnicos de verificación. Generando con ello vacíos normativos que dificultad la aplicación adecuada de la prueba digital dentro del proceso, teniendo en cuenta que en países como España, Colombia, Argentina y Estados Unidos, cuentan con regulaciones específicas que fortalecen la seguridad jurídica.

En cuanto a los criterios jurídicos, se concluyó que los jueces del Complejo Judicial de Ambato coinciden en que la sana critica es el mecanismo principal en la valoración de la prueba digital. Sin embargo, su uso plantea limitaciones específicas, como es la falta de una capacitación especializada, la carencia de peritos informáticos acreditados y la casi inexistencia de jurisprudencia especifica en materia de la prueba digital, obligando a los juzgadores a buscar información únicamente por medio de doctrina. Evidenciándose así por medio de las entrevistas, comprometiendo con ello la objetividad de las decisiones y la seguridad jurídica del proceso.

Finalmente, se concluye que la motivación judicial en la prueba digital exige una fundamentación reforzada en la cual debe complementarse en el nivel técnico el mismo que busca la evaluación de la trazabilidad, autenticidad e integridad, así como el nivel jurídico el cual busca la verificación de la licitud, pertinencia y conducencia y por último el nivel argumentativo, donde se vincula los elementos técnicos y jurídicos, pues una motivación insuficiente puede vulnerar el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Recomendaciones

En cuanto a la aplicación de la sana critica por medio de los jueces, se identifica la falta de capacitación especializada de la prueba digital, es por ello por lo que se recomienda al Consejo de la Judicatura implementar programas de capacitación continúa dirigidos a jueces y abogados del libre ejercicio, existiendo con ello una actualización sobre la prueba digital y su valoración, permitiendo mejorar la fundamentación adecuada en las resoluciones.

Se evidencia una escasez de peritos especializados en informática forense dentro del sistema judicial ecuatoriano, recomendando con ello que el Consejo de la Judicatura promueva la acreditación y registros de estos peritos, facilitando con ello la intervención obligatoria dentro de los procesos civiles ecuatorianos. Por lo mismo se recomienda que en las universidades en la carrera de Derecho exista la incorporación en su malla curricular sobre contenidos relacionados a la prueba digital, informática forense y la valoración de estas pruebas digitales, formando con ello profesionales que tengan un conocimiento técnico adecuado.

Finalmente, se ha determinado la ausencia de jurisprudencia especifica en materia de la prueba digital, se recomienda que la Corte Nacional de Justicia desarrolle fallos que puedan establecer parámetros mínimos de motivación consideración los niveles técnicos, jurídicos y argumentativos, para que dichos criterios puedan ayudar a los jueces de primer nivel para poder garantizar decisiones coherentes y adecuadas del debido proceso dentro de los procesos civiles ecuatorianos.

Bibliografía

Alcívar Junco, G. y Estrella Cedeño, M. (10 de noviembre del 2025). La motivación de las resoluciones judiciales en el proceso civil ecuatoriano, que equilibres técnicas jurídicas y comprensión ciudadana. Ciencias y Educación, 6(10.2), 545-562. https://doi.org/10.5281/zenodo.17614148

Alvarado, J., Mejía, E., y Becerra, L., (23 de marzo del 2025). Motivación en garantías jurisdiccionales: estándares y aplicaciones en Ecuador. Revista Jurídica del Departamento de Derecho BIOLEX, 7(28), 1-12. https://doi.org/10.36796/biolex.v17i28.405

Álvarez, V. (2023). Valoración de la prueba digital en el proceso civil. [Tesis de Especialidad, Universidad de Antioquia]. Repositorio Institucional: http://bibliotecadigital.udea.edu.co

Arreaga, M. (2021). La admisibilidad de los medios de prueba en los procesos civiles, a partir de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos y la vulneración del derecho a la defensa [Tesis de Maestría, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil]. Repositorio Institucional: http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16840

Asamblea Nacional de Ecuador (2002, 17 de abril). Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos. https://bit.ly/48PBcnO

Asamblea Nacional de Ecuador (2009, 22 de octubre). Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. https://bit.ly/4u0ckC8

Bajaña, F. (30 de junio del 2025). Suficiencia y corrección motivacional: análisis crítico de garantía de la motivación. RFJ Revista Facultad de Jurisprudencia, 2025(17), 51-77. https://www.revistarfjpuce.edu.ec/index.php/rfj/article/view/533

Bujosa, L., Bustamante, M, y Toro, L. (25 agosto del 2021). La prueba digital producto de la vigilancia secreta: obtención, admisibilidad y valoración en los procesos penales en España y Colombia. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, 7(2), 1347-1384. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v7i2.482

Carrasco, D. (23 de marzo del 2020). La definición constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva. UNED Revista de Derecho Político, 107, 13-40. https://doi.org/10.5944/rdp.107.2020.27182

Casey, E. (2011). Digital evidence and computer crime, forensic science, computers and the internet. Elsevier Academic Press. https://shop.elsevier.com/books/digital-evidence-and-computer-crime/casey/978-0-08-092148-8

Castelo, G., y Hidalgo, F. (14 de octubre del 2024). El principio de inmediación y la actividad probatoria en la administración de justicia: un análisis de la normativa procesal ecuatoriana. Revista Esprint Investigación, 3(2), 25-36. https://doi.org/10.61347/ei.v3i2.72

Cerdán, M. (06 de enero del 2025). El rol de la debida motivación de las resoluciones judiciales en un Estado social y democrático de derecho. Revista Peruana de Derecho Constitucional. (16), 385-415. https://revista.tc.gob.pe/index.php/revista/article/view/451

Cevallos, G., y Litardo, F. (octubre 2018). Análisis de los principios constitucionales que regulan el nuevo sistema procesal civil ecuatoriano. Universidad y Sociedad, 10(5), 248-254. http://rus.ucf.edu.cu/index.php/ rus

Código Orgánico General de Procesos [COGEP]. Registro Oficial Suplemento 506 de 22 de mayo de 2015 (Ecuador). https://bit.ly/4tq6pVR

Congreso de Colombia. (1999). Ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales.

Congreso de la Nación Argentina. (2001). Ley 25.506 de Firma Digital.

Constitución de la Republica del Ecuador [CRE]. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008 (Ecuador). https://bit.ly/2B93igI

Corte Constitucional del Ecuador (2021). Sentencia No. 1158-17-EP/21. (Caso Garantía de la motivación). Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador.

Corte Constitucional del Ecuador (2025). Sentencia No. 1852-21-EP/25. (Acción Extraordinaria de Protección). Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador.

Corte Nacional de Justicia del Ecuador. (2020). Sentencia del Recurso de Casación dentro del Proceso No. 17230-2019-02515 (Resolución de contrato). Sala Especializada de lo Civil y Mercantil.

Cueva, L. (2013). El principio de congruencia en el proceso civil. Universidad Andina Simón Bolívar/ Corporación Editorial Nacional. https://www.uasb.edu.ec/publicacion/el-principio-de-congruencia-en-el-proceso-civil/

Delgado, J. (26 de noviembre del 2024). El derecho a la motivación en el Ecuador- Aportes conceptuales y procedimentales desde la Sentencia 1158-17-EP/21. Universidad Politécnica Salesiana, 117-139. https://doi.org/10.17163/abyaups.86.671

Diotto, M. (2025). La prueba electrónica en el proceso civil. [Seminario de investigación aplicada, Universidad Nacional de la Plata]. Repositorio Institucional UNLP: https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/180290

Escobar, M. (2010). La valoración de la prueba, en la motivación de una sentencia en la legislación ecuatoriana (Trabajo de maestría). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

España. Jefatura del Estado. (2000). Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Boletín Oficial del Estado.

Espinosa, C. (2010). Teoría de la motivación de las resoluciones judiciales y jurisprudencia de casación y electoral. Tribunal Contencioso Electoral.

Federal Rules of Evidence, 28 U.S.C. §§ 901, 902, 1001, 1003 (2024). uscourts.gov

Galarza, P. (2018). Practica de la prueba documental a partir de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos COGEP [Tesis de Grado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. Repositorio Institucional: https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/28573

Gallardo, D. (2024). La motivación como garantía del debido proceso. Análisis del Caso No. -1158-17-EP/21. [Tesis de Maestría, Universidad Tecnológica Indoamérica]. Repositorio Institucional: https://repositorio.uti.edu.ec/items/b9f93711-21bc-46c0-ab80-eb3246706f2f

Gómez Lara, C. (1974). La teoría general de la prueba en Estudios Jurídicos. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3842/4.pdf

Inés, M. (2024). La prueba digital en el proceso civil oral de Córdoba. [Articulo Científico, Universidad Católica de Córdoba]. Repositorio Institucional: https://doi.org/10.22529/adc.2024(14)08

Izurieta, L. (2023). La motivación en decisiones judiciales de la Unidad Civil de Santo Domingo. [Articulo Científico, Universidad Regional Autónoma de los Andes]. Repositorio Institucional: https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/17150

Landáez Otazo, L. y Landáez Arcaya, N. (18 de septiembre del 2007). La equivalencia funcional, la neutralidad tecnológica y la libertad informática. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 3, 11-49. http://www.servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/3-2007/art%201.pdf

Liza Castillo, L. (2022). Importancia de la motivación de las resoluciones. Revista Oficial del Poder Judicial, 14(18). 289-304. https://doi.org/10.35292/ropj.v14i18.610

López Morales, Z. (15 de agosto del 2023). Validez Jurídica de la prueba digital en Guatemala. CUNORI Revista Ciencias Múltiples, 7(2), 203-214. https://doi.org/10.36314/cunori.v7i2.238

Martínez Galindo, G. (28 de agosto del 2022). Problemática jurídica de la prueba digital y sus implicaciones en los principios penales. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Universidad Internacional de la Rioja. 24 (23), 1-38. http://criminet.ugr.es/recpc/24/recpc24-23.pdf

Meza, M.(2024). La prueba digital en el proceso civil oral de Córdoba. Anuario de Derecho Civil, 14, 140-160. https://doi.org/10.22529/adc.2024(14)08

Milione, C. (22 de diciembre del 2015). El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el derecho a la claridad: Reflexiones en torno a una deseada modernización del lenguaje jurídico. Estudios de Deusto/ Revista de Derecho Público. 63(2), 173-188. https://doi.org/10.18543/ed-63(2)-2015pp173-188

Mogrovejo, M. (2023). La motivación aparente como vulneración al derecho al debido proceso en la jurisprudencia constitucional. [Tesis de Grado, Universidad Internacional del Ecuador]. Repositorio Institucional: https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5908

Montenegro Muguerza, J. (2022). La prueba y su valoración en el proceso: La carga de la prueba una institución procesal superflua en el sistema de valoración libre. Portal Jurídico LP Diposit Digital. https://hdl.handle.net/2445/190924

Oleas, C. (2023). La valoración de la prueba digital en los procesos civiles en el Ecuador. [Tesis de Maestría, Universidad del Azuay]. Repositorio Institucional: http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13206

Ortiz, C. (2020). El principio de motivación y la seguridad jurídica [Tesis de Grado]. Repositorio Institucional: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/11982

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2014). Reglamento (UE) n.º 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.

Puetate, J., Coka D., y Méndez C., (10 de agosto del 2021). La prueba digital en procesos judiciales aplicables al Código Orgánico General de Procesos (COGEP), a partir de la pandemia COVID-19. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 8(17). 1-22. https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2696

Reyes Inca, M. (09 de enero del 2025). La prueba digital en los procesos civiles y su prohibición. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 5(6), 3689-3700. https://doi.org/10.56712/latam.v5i6.3270

Reyes, M. (2024). La autenticidad e integridad de la prueba digital en el juicio de amparo. Editorial Porrúa.

Ricaurte, C. (2023). Derecho a la Motivación, Análisis a partir de la sentencia 1158-17-EP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador. CÁLAMO Revista de Estudios Jurídicos, 18, 31-44. https://doi.org/10.61243/calamo.18.39

Rivera, T. (2021). La motivación de las sentencias constituciones como garantía del proceso al debido proceso. [Tesis de Maestría, Universidad Técnica de Machala]. Repositorio

Institucional: https://repositorio.utmachala.edu.ec/items/07028ddf-66d3-4a83-91cd-2c74edf4237a

Ruiz Jaramillo, L. (07 de marzo del 2007). El derecho a la prueba como un derecho fundamental. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Antioquia Medellín, 64(143), 184- 206. https://revistas.udea.edu.co/index.php/red/article/view/2552

Ruiz, E. (2006). La prueba en el proceso penal. Colección Estudios Jurídicos; Ministerio de Justicia de España.

Sani, Y. (2025). La práctica de la prueba digital y su valoración por los jueces civiles en las audiencias orales [Tesis de Grado, Universidad Nacional de Chimborazo]. Repositorio Institucional: http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15721

Taruffo, M. (2006). La motivación de la sentencia civil. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Vargas Morales, R. (19 de abril del 2023). Seguridad jurídica como fin del derecho. UCU Revista de Derecho, 27. 1-16. https://doi.org/10.22235/rd27.3075

Vázquez Azuara, C. (enero- abril del 2022). El panorama actual de la prueba digital en el contexto de la justicia electrónica en México en materia penal. Universidad de Xalapa, 10(27), 43-71. https://universita.ux.edu.mx/universita-ciencia/article/view/802

Velaña Bayas, E. (01 de julio del 2021). El recurso de casación y su configuración en la causal cuarta del artículo 268 del COGEP. Veritas & Research, 3(1), 50-59. https://revistas.pucesa.edu.ec/ojs/index.php?journal=VR&page=article&op=view&path[]=51

ANEXOS

Fotografias de entrevistados

Figura 1

Entrevista con el Doctor Villacres



Figura 2

Entrevista Doctor Amado Bravo

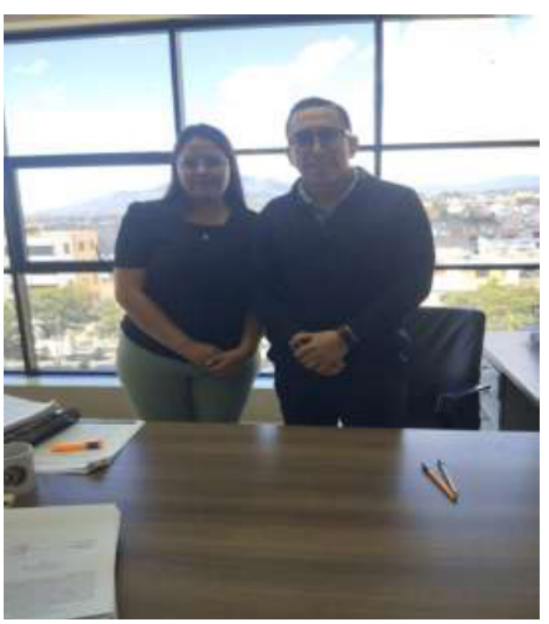


Figura 3

Entrevista al Doctor Jorge Frías



Guia de entrevista

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

DATOS GENERALES

Título de la investigación: "La valoración de la prueba digital y la motivación en el proceso civil ecuatoriano"

Objetivo del instrumento: Recabar información sobre los criterios utilizados por jueces de lo civil en la valoración de la prueba digital y en la motivación de las decisiones judiciales.

DATOS

Nombre Completo:

Especialidad:

Institución a la que pertenece:

PREGUNTAS:

1. Desde su experiencia ¿Cómo define a la prueba digital?

2. ¿Qué características debe evidenciar para ser considerada como prueba digital?

3. ¿Se debe considerar que la prueba digital es equivalente a la prueba documental?

4. ¿Cuáles son los criterios que se deben aplicar para valorar la autenticidad de una prueba digital?

5. En el caso de haber requerido un informe pericial ¿Los criterios de autenticidad e integridad, emitidos por los peritos, deben constituir en los únicos elementos para dicha valoración?

6. Para la motivación de la prueba digital que criterios, doctrinarios, jurisprudenciales y normativos aplica en la motivación de resoluciones.

7. En su experiencia, ¿Cuáles son las dificultades (técnicas y normativas) para valorar la prueba digital?

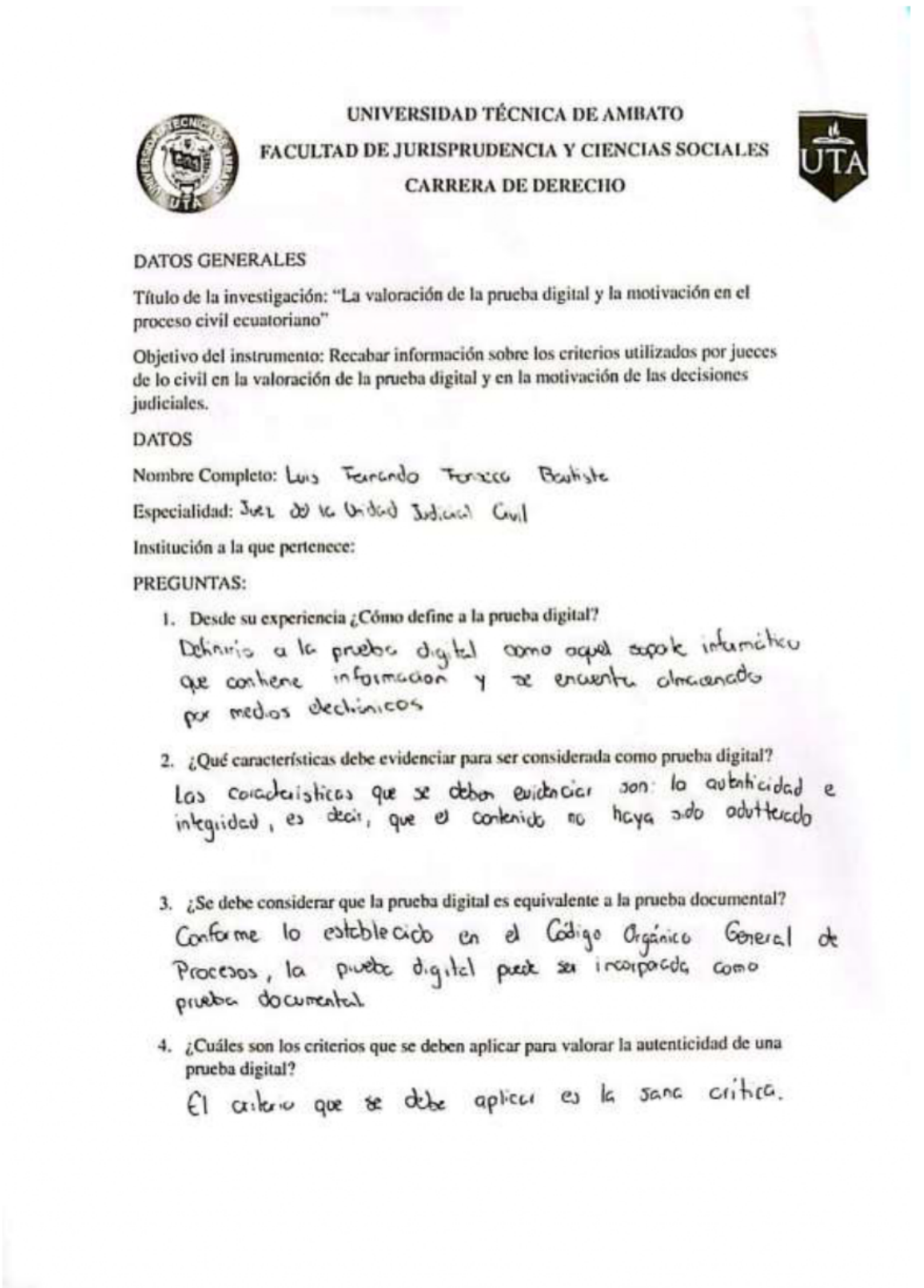
8. En su experiencia laboral, ¿Existen riesgos de manipulación, alteración o falsificación de las pruebas digitales?

9. ¿Cuáles deben ser los desafíos del sistema judicial, para garantizar (mejorar) la adecuada valoración de la prueba digital?

Constancia de entrevistas realizadas

Figura 4

Entrevista Doctor Luis Fonseca



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

DATOS GENERALES

Título de la investigación: "La valoración de la prueba digital y la motivación en el proceso civil ecuatoriano"

Objetivo del instrumento: Recabar información sobre los criterios utilizados por jueces de lo civil en la valoración de la prueba digital y en la motivación de las decisiones judiciales.

DATOS

Nombre Completo: Luis Fernando Fonseca Bautista

Especialidad: Juez de la Unidad Judicial Civil

Institución a la que pertenece:

PREGUNTAS:

1. Desde su experiencia ¿Cómo define a la prueba digital?

   Definiría a la prueba digital como aquel soporte informático que contiene información y se encuentra almacenado por medios electrónicos

2. ¿Qué características debe evidenciar para ser considerada como prueba digital?

   Las características que se deben evidenciar son: la autenticidad e integridad, es decir, que el contenido no haya sido adulterado

3. ¿Se debe considerar que la prueba digital es equivalente a la prueba documental?

   Conforme lo establecido en el Código Orgánico General de Procesos, la prueba digital puede ser incorporada como prueba documental

4. ¿Cuáles son los criterios que se deben aplicar para valorar la autenticidad de una prueba digital?

   El criterio que se debe aplicar es la sana crítica.

5. En el caso de haber requerido un informe pericial ¿Los criterios de autenticidad e integridad, emitidos por los peritos, deben constituir en los únicos elementos para dicha valoración?

No, ya que los informes periciales, así como, los criterios del perito son auxiliares, por lo que hay que contrastar dicho informe con las demás pruebas

6. Para la motivación de la prueba digital que criterios, doctrinarios, jurisprudenciales y normativos aplica en la motivación de resoluciones.

Se aplican los parámetros de la Corte Constitucional, las reglas de la prueba determinados en el COGEP.

7. En su experiencia, ¿Cuáles son las dificultades (técnicas y normativas) para valorar la prueba digital?

Considero que una dificultad es la fácil alteración de la prueba digital, y la complejidad para verificar dicha información.

8. En su experiencia laboral, ¿Existen riesgos de manipulación, alteración o falsificación de las pruebas digitales?

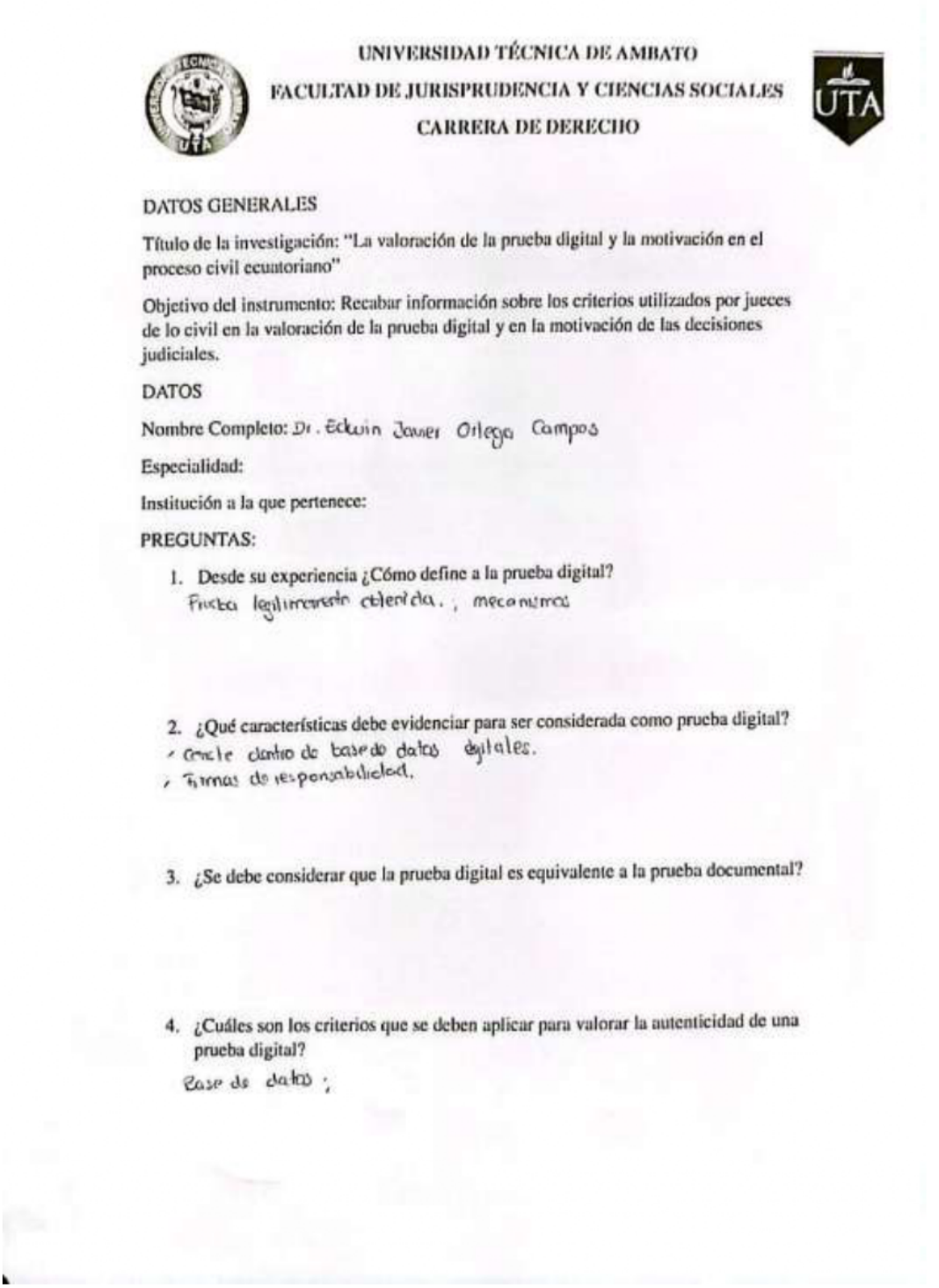
Sí existen riesgos, por eso es importante que la prueba digital sea materializada.

9. ¿Cuáles deben ser los desafíos del sistema judicial, para garantizar (mejorar) la adecuada valoración de la prueba digital?

Contar con las herramientas necesarias para visualizar y analizar la prueba en su formato original.

Figura 5

Entrevista Doctor Edwin Ortega



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

DATOS GENERALES

Título de la investigación: "La valoración de la prueba digital y la motivación en el proceso civil ecuatoriano"

Objetivo del instrumento: Recabar información sobre los criterios utilizados por jueces de lo civil en la valoración de la prueba digital y en la motivación de las decisiones judiciales.

DATOS

Nombre Completo: Dr. Edwin Javier Ortega Campos

Especialidad:

Institución a la que pertenece:

PREGUNTAS:

1. Desde su experiencia ¿Cómo define a la prueba digital?
   Fuente legalmente obtenida., mecanismo

2. ¿Qué características debe evidenciar para ser considerada como prueba digital?
   - Grande cantidad de base de datos digitales.
   - Firmas de responsabilidad.

3. ¿Se debe considerar que la prueba digital es equivalente a la prueba documental?

4. ¿Cuáles son los criterios que se deben aplicar para valorar la autenticidad de una prueba digital?
   Base de datos;

5. En el caso de haber requerido un informe pericial ¿Los criterios de autenticidad e integridad, emitidos por los peritos, deben constituir en los únicos elementos para dicha valoración?

No, dado de la cara crítica.

6. Para la motivación de la prueba digital que criterios, doctrinarios, jurisprudenciales y normativos aplica en la motivación de resoluciones.

Las mismas que las pruebas documentales.

No hasta ahora no.

7. En su experiencia, ¿Cuáles son las dificultades (técnicas y normativas) para valorar la prueba digital?

Contar con un perito; autenticidad, veracidad.

Para valorar no.

8. En su experiencia laboral, ¿Existen riesgos de manipulación, alteración o falsificación de las pruebas digitales?

Si, dado con el avance de la tecnología.

Caso personal, ninguno.

9. ¿Cuáles deben ser los desafíos del sistema judicial, para garantizar (mejorar) la adecuada valoración de la prueba digital?

No, pocos conocimientos.

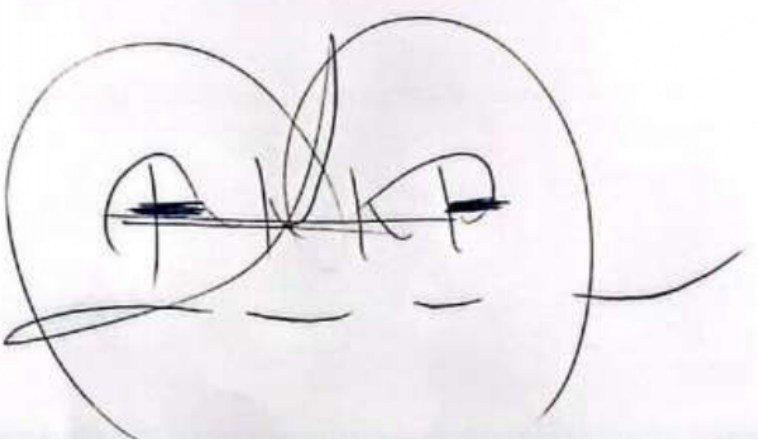
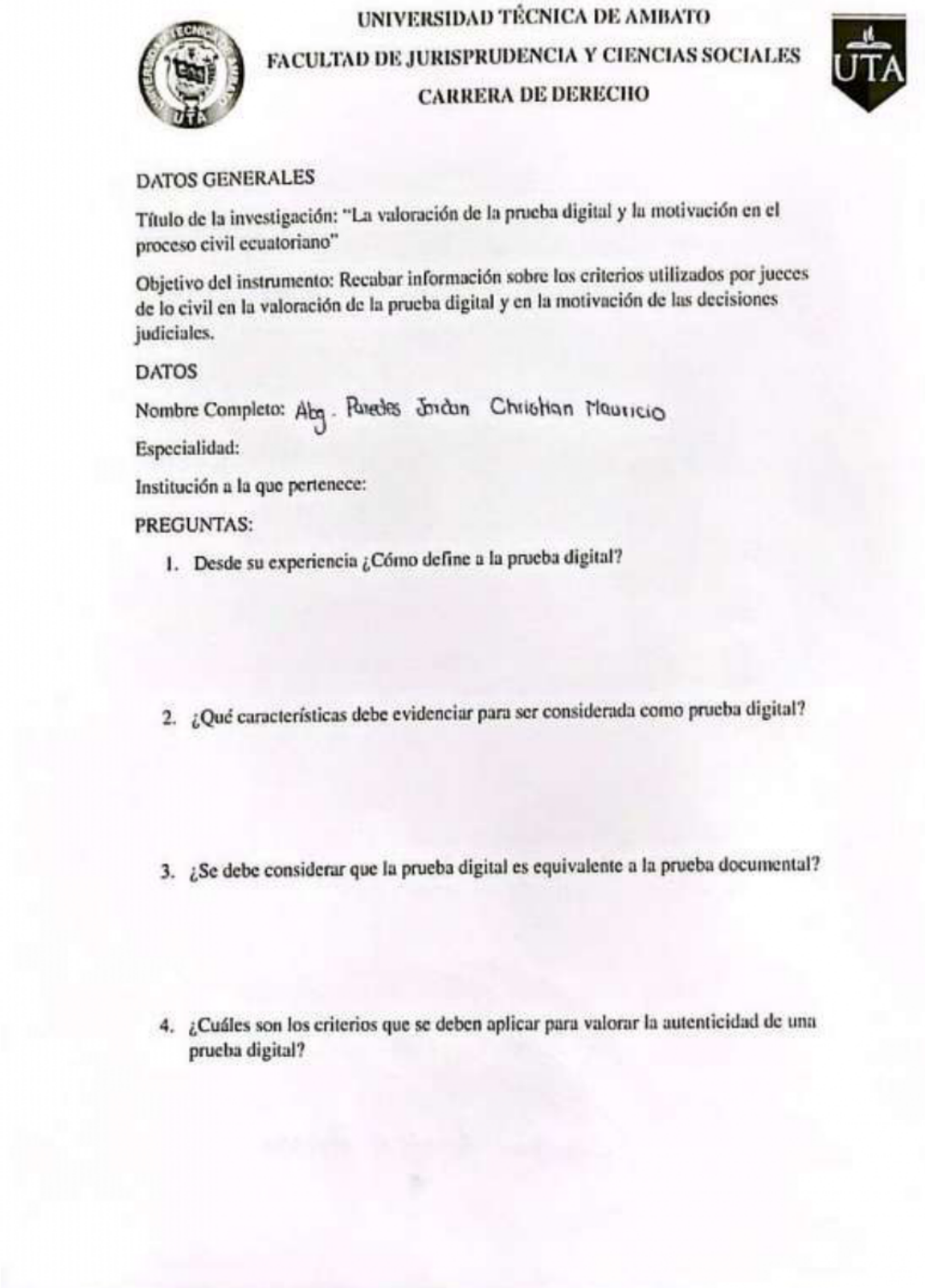


Figura 6 Entrevista

Entrevista al Abg. Cristhian Paredes



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

DATOS GENERALES

Título de la investigación: "La valoración de la prueba digital y la motivación en el proceso civil ecuatoriano"

Objetivo del instrumento: Recabar información sobre los criterios utilizados por jueces de lo civil en la valoración de la prueba digital y en la motivación de las decisiones judiciales.

DATOS

Nombre Completo: Abg. Paredes Jordan Christian Mauricio

Especialidad:

Institución a la que pertenece:

PREGUNTAS:

1. Desde su experiencia ¿Cómo define a la prueba digital?

2. ¿Qué características debe evidenciar para ser considerada como prueba digital?

3. ¿Se debe considerar que la prueba digital es equivalente a la prueba documental?

4. ¿Cuáles son los criterios que se deben aplicar para valorar la autenticidad de una prueba digital?

5. En el caso de haber requerido un informe pericial ¿Los criterios de autenticidad e integridad, emitidos por los peritos, deben constituir en los únicos elementos para dicha valoración?

6. Para la motivación de la prueba digital que criterios, doctrinarios, jurisprudenciales y normativos aplica en la motivación de resoluciones.

7. En su experiencia, ¿Cuáles son las dificultades (técnicas y normativas) para valorar la prueba digital?

8. En su experiencia laboral, ¿Existen riesgos de manipulación, alteración o falsificación de las pruebas digitales?

9. ¿Cuáles deben ser los desafíos del sistema judicial, para garantizar (mejorar) la adecuada valoración de la prueba digital?

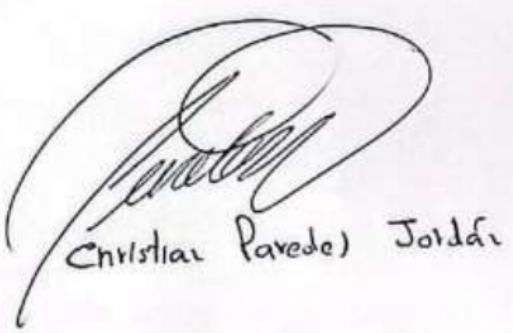
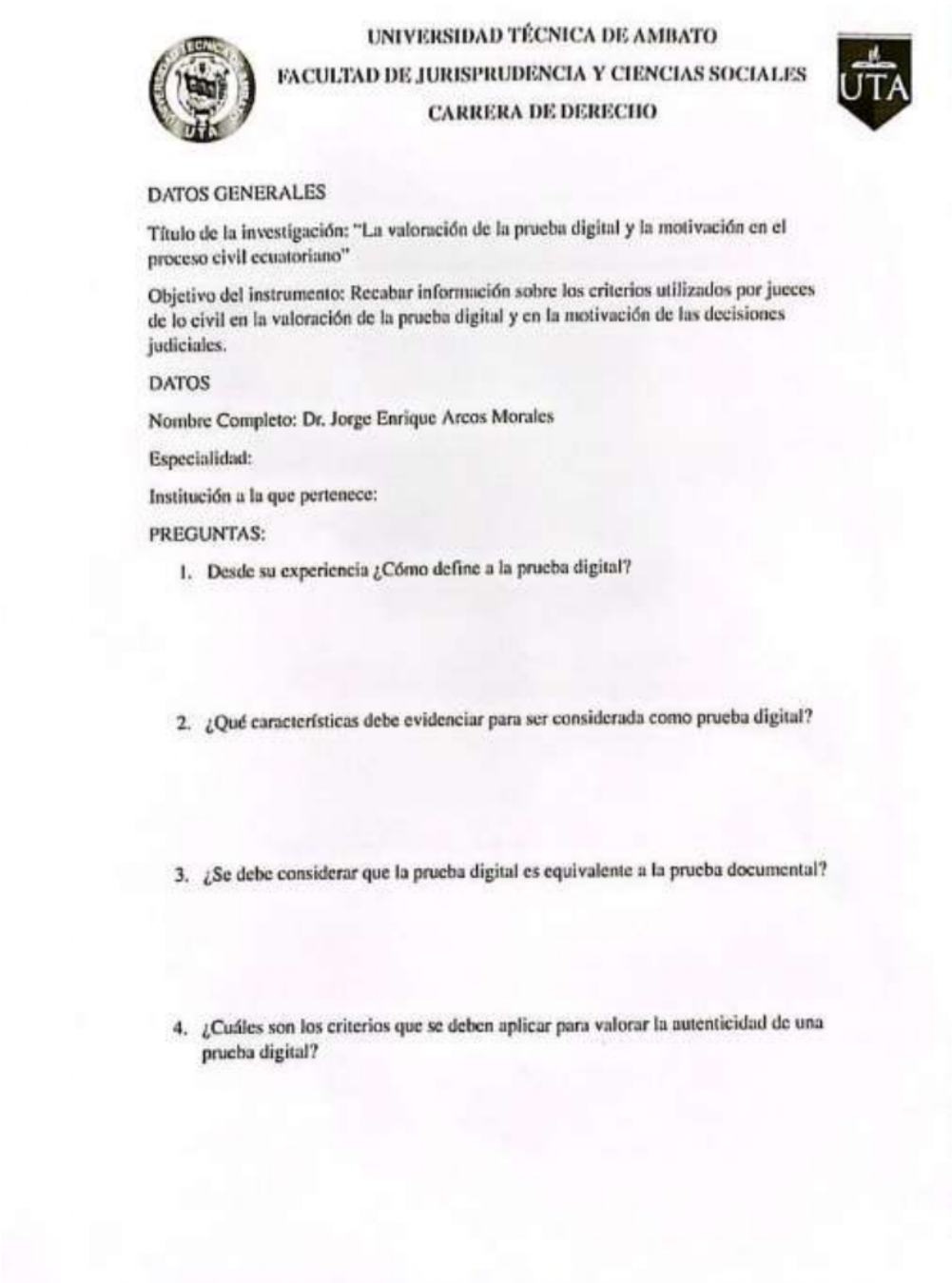


Figura 7

Entrevista al Doctor Jorge Arcos



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

DATOS GENERALES

Título de la investigación: "La valoración de la prueba digital y la motivación en el proceso civil ecuatoriano"

Objetivo del instrumento: Recabar información sobre los criterios utilizados por jueces de lo civil en la valoración de la prueba digital y en la motivación de las decisiones judiciales.

DATOS

Nombre Completo: Dr. Jorge Enrique Arcos Morales

Especialidad:

Institución a la que pertenece:

PREGUNTAS:

1. Desde su experiencia ¿Cómo define a la prueba digital?

2. ¿Qué características debe evidenciar para ser considerada como prueba digital?

3. ¿Se debe considerar que la prueba digital es equivalente a la prueba documental?

4. ¿Cuáles son los criterios que se deben aplicar para valorar la autenticidad de una prueba digital?

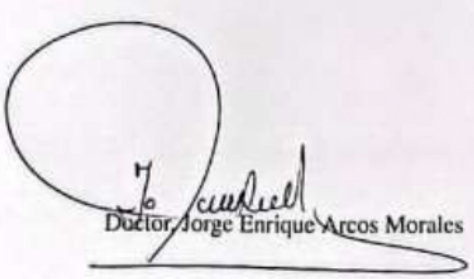
5. En el caso de haber requerido un informe pericial ¿Los criterios de autenticidad e integridad, emitidos por los peritos, deben constituir en los únicos elementos para dicha valoración?

6. Para la motivación de la prueba digital que criterios, doctrinarios, jurisprudenciales y normativos aplica en la motivación de resoluciones.

7. En su experiencia, ¿Cuáles son las dificultades (técnicas y normativas) para valorar la prueba digital?

8. En su experiencia laboral, ¿Existen riesgos de manipulación, alteración o falsificación de las pruebas digitales?

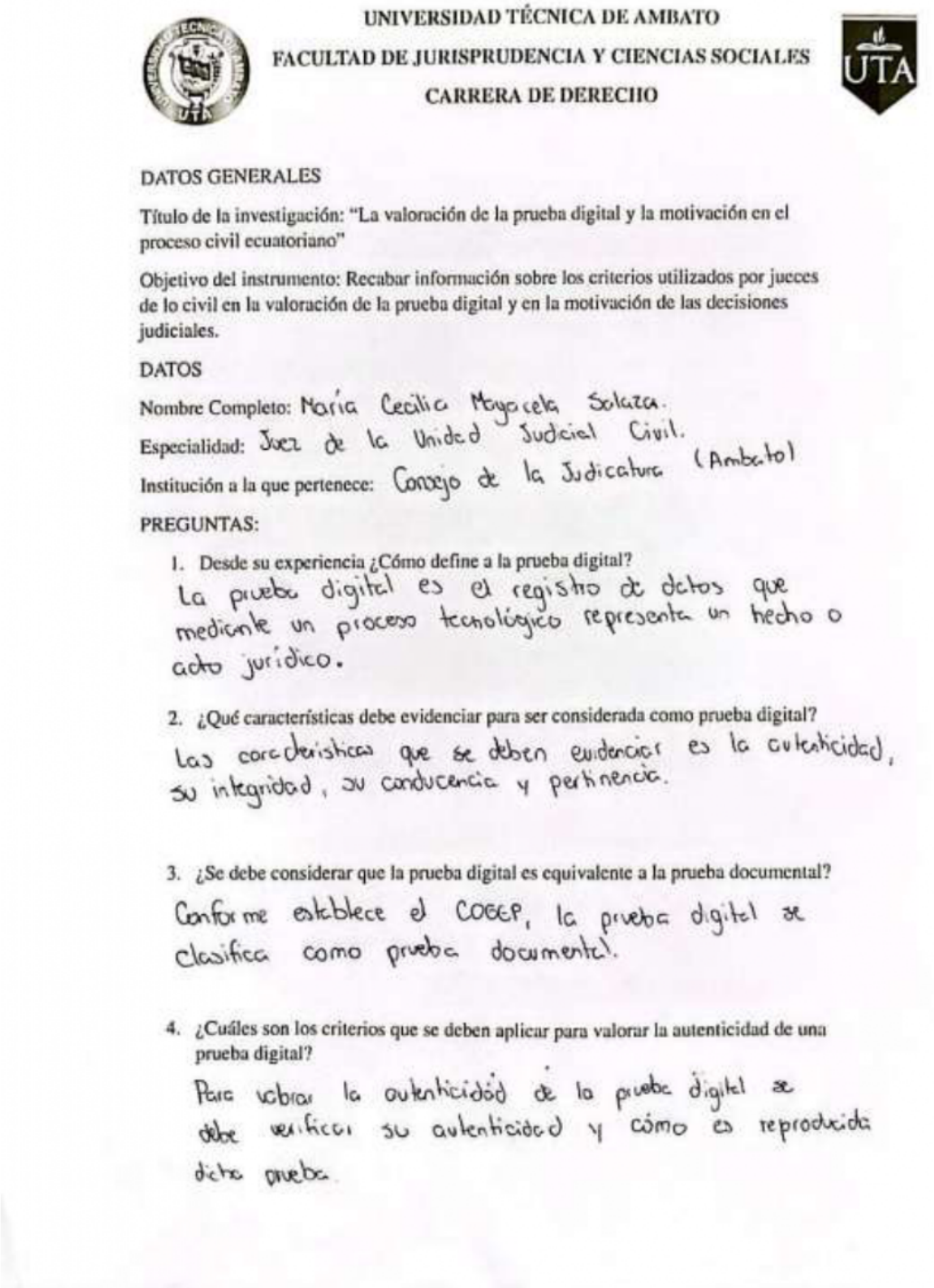
9. ¿Cuáles deben ser los desafíos del sistema judicial, para garantizar (mejorar) la adecuada valoración de la prueba digital?



Doctor Jorge Enrique Arcos Morales

Figura 8

Entrevista Doctora Cecilia Mayacela



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

DATOS GENERALES

Título de la investigación: "La valoración de la prueba digital y la motivación en el proceso civil ecuatoriano"

Objetivo del instrumento: Recabar información sobre los criterios utilizados por jueces de lo civil en la valoración de la prueba digital y en la motivación de las decisiones judiciales.

DATOS

Nombre Completo: María Cecilia Mayacela Solarte.

Especialidad: Juez de la Unidad Judicial Civil.

Institución a la que pertenece: Consejo de la Judicatura (Ambato)

PREGUNTAS:

1. Desde su experiencia ¿Cómo define a la prueba digital?

La prueba digital es el registro de datos que mediante un proceso tecnológico representa un hecho o acto jurídico.

2. ¿Qué características debe evidenciar para ser considerada como prueba digital?

Las características que se deben evidenciar es la autenticidad, su integridad, su conducencia y pertinencia.

3. ¿Se debe considerar que la prueba digital es equivalente a la prueba documental?

Conforme establece el COGEP, la prueba digital se clasifica como prueba documental.

4. ¿Cuáles son los criterios que se deben aplicar para valorar la autenticidad de una prueba digital?

Para valorar la autenticidad de la prueba digital se debe verificar su autenticidad y cómo es reproducida dicha prueba.

5. En el caso de haber requerido un informe pericial ¿Los criterios de autenticidad e integridad, emitidos por los peritos, deben constituir en los únicos elementos para dicha valoración?

No, el peritaje es una herramienta de auxilio, no una decisión, por lo que, si el juez aplica su sana crítica, podría apartarse de lo indicado en el informe pericial.

6. Para la motivación de la prueba digital que criterios, doctrinarios, jurisprudenciales y normativos aplica en la motivación de resoluciones.

Aplico el control de logicidad, explicando por qué dicha prueba digital genera convicción, y además se toma en consideración los presupuestos establecidos en el COGEP y en la Corte Nacional de Justicia.

7. En su experiencia, ¿Cuáles son las dificultades (técnicas y normativas) para valorar la prueba digital?

La falta de péritos calificados que ayuden a realizar peritajes, y la forma en que sea practicada la prueba.

8. En su experiencia laboral, ¿Existen riesgos de manipulación, alteración o falsificación de las pruebas digitales?

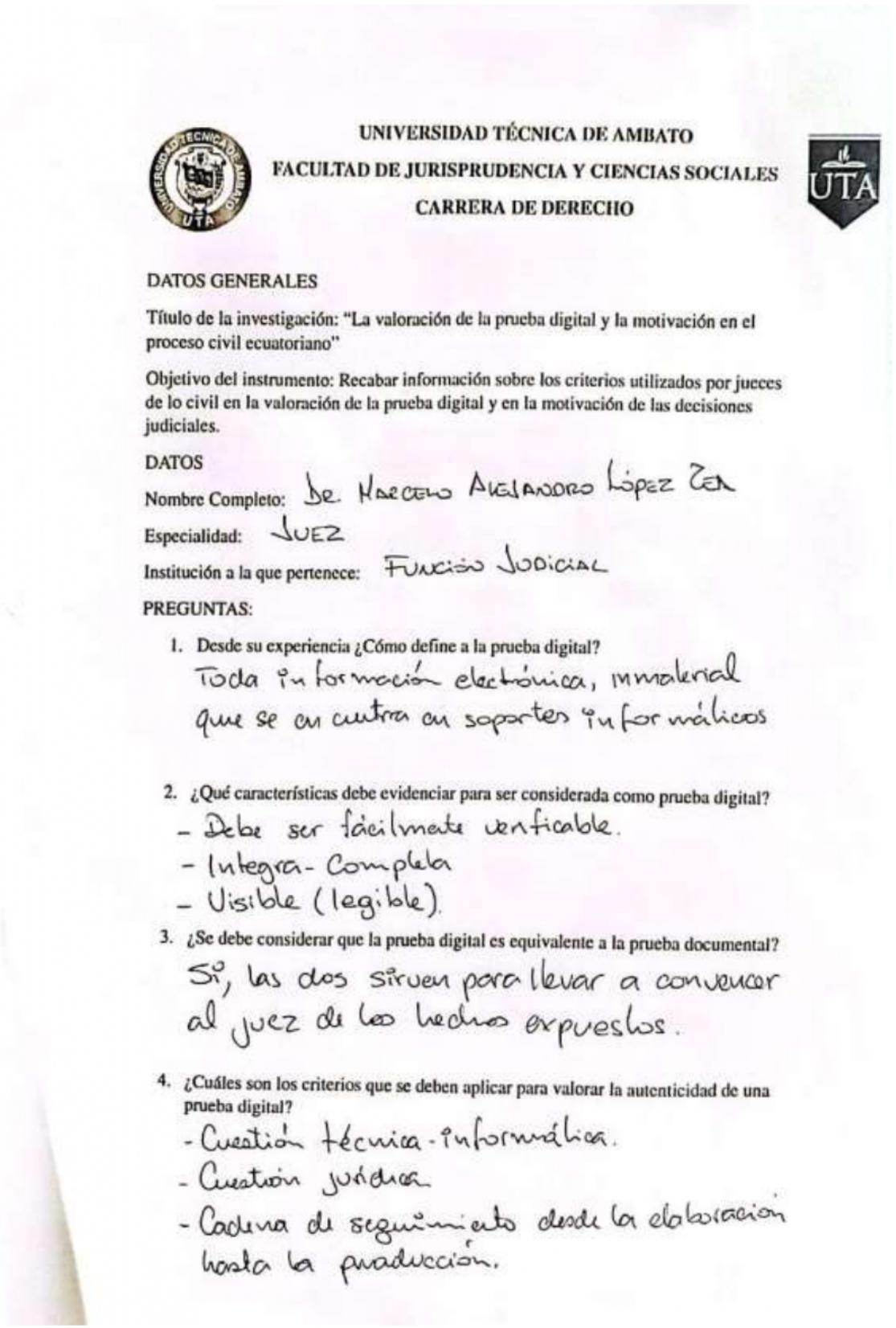
Sí, existen riesgos, puesto que hay la facilidad de que las pruebas sean alteradas.

9. ¿Cuáles deben ser los desafíos del sistema judicial, para garantizar (mejorar) la adecuada valoración de la prueba digital?

El mayor desafío sería la unificación de criterios y la falta de una doctrina clara, respecto a la valoración de la prueba digital.

Figura 9

Entrevista al Doctor Alejandro López



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

DATOS GENERALES

Título de la investigación: "La valoración de la prueba digital y la motivación en el proceso civil ecuatoriano"

Objetivo del instrumento: Recabar información sobre los criterios utilizados por jueces de lo civil en la valoración de la prueba digital y en la motivación de las decisiones judiciales.

DATOS

Nombre Completo: Dr. Marcelo Alejandro López Zea

Especialidad: Juez

Institución a la que pertenece: Función Judicial

PREGUNTAS:

1. Desde su experiencia ¿Cómo define a la prueba digital?
   Toda información electrónica, inmaterial que se encuentra en soportes informáticos

2. ¿Qué características debe evidenciar para ser considerada como prueba digital?
   - Debe ser fácilmente verificable.
   - Integra - Completa
   - Visible (legible).

3. ¿Se debe considerar que la prueba digital es equivalente a la prueba documental?
   Sí, las dos sirven para llevar a convencer al juez de los hechos expuestos.

4. ¿Cuáles son los criterios que se deben aplicar para valorar la autenticidad de una prueba digital?
   - Cuestión técnica - informática.
   - Cuestión jurídica
   - Cadena de seguimiento desde la elaboración hasta la producción.

5. En el caso de haber requerido un informe pericial ¿Los criterios de autenticidad e integridad, emitidos por los peritos, deben constituir en los únicos elementos para dicha valoración?

No, se debe valorar en su conjunto pertinencia, fiabilidad, exposición.

6. Para la motivación de la prueba digital que criterios, doctrinarios, jurisprudenciales y normativos aplica en la motivación de resoluciones.

Varias desde la Constitución; Ley de Comercio electrónico; datos personales, sentencias de C. Constitucional Corte Nacional y libros de principios de fiabilidad tecnológicos y otros

7. En su experiencia, ¿Cuáles son las dificultades (técnicas y normativas) para valorar la prueba digital?

- Verificar la autenticidad - sistemas informáticos fallan
- Riesgo alto de alteración o manipulación.
- falta identificar origen.
- No existe una correcta cadena de custodia

8. En su experiencia laboral, ¿Existen riesgos de manipulación, alteración o falsificación de las pruebas digitales?

Sí.

9. ¿Cuáles deben ser los desafíos del sistema judicial, para garantizar (mejorar) la adecuada valoración de la prueba digital?

- Realizar capacitaciones a funcionarios judiciales
- Actualizar la tecnología. debiendo tener a punto sus sistemas informáticos
- Obtener programas para verificación y origen.